

PASIÓN

CAPÍTULO II





15 de agosto



Los indígenas marcharon por lo que consiguieron hace más de dos décadas

Unos 800 indígenas salieron de Trinidad el 15 de agosto de 2011. Rechazaban el proyecto del gobierno de construir una carretera por el corazón del TIPNIS y exigían el respeto a sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado.

En el inicio de la “VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas” Ernesto Noe exclamó: “¡Gracias al pueblo boliviano! Nuevamente nos encontramos aquí frente a la catedral de la Santísima Trinidad para recordarle [al gobierno] que en este día, [como] hace 21 años, partimos para pedirle al gobierno territorios indígenas”.

Noe, que en 1990 guió a los indígenas de tierras bajas hasta La Paz en la marcha por el “territorio y la dignidad”, resumía de esa manera el carácter de la manifestación que comenzó en Trinidad el 15 de agosto

de 2011: Los indígenas del oriente, del Chaco y de la Amazonía boliviana debían luchar nuevamente por el respeto a sus derechos después de dos décadas de haber logrado su territorio, también con una marcha a la sede de gobierno.

Cuando cerca de 500 indígenas comenzaron la caminata desde la capital beniana, el gobierno continuaba firme en su decisión de construir la vía. Setenta y un días después, el presidente Evo Morales, obligado por los marchistas y una gran adhesión popular a la causa de éstos, promulgó una ley de protección del TIPNIS frente a un auditorio, mayoritariamente indígena, que la noche del 24 de octubre llenó el vestíbulo de Palacio de Gobierno en La Paz.

Durante las dos jornadas previas a la partida de la Octava Marcha, las delegaciones de las regionales indígenas llegaron a Trinidad y se concentraron en el coliseo deportivo polifuncional El Pantanal, ubicado en el barrio del mismo nombre de esa capital.

La noche del 14 de agosto, miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), de la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CIPTCO), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) compartieron en ese escenario deportivo. Al día siguiente partieron rumbo a La Paz.

El presidente Evo Morales ha sido considerado, desde su primera gestión (2005-2009), como el primer gobernante indígena de Bolivia. Se trata de un régimen que discursivamente se aleja del neoliberalismo precedente y cuyo líder en las dos últimas elecciones generales ganó con una votación superior al 50 por ciento, lo que le permitió llegar a la presidencia sin hacer coalición parlamentaria alguna.

Por eso fue difícil para los indígenas del oriente, la Amazonía y el Chaco optar por la marcha como una forma de presión sobre un gobierno que percibían como indígena y, por tanto, aliado de su identidad e intereses.

“Esta medida que nosotros tomamos es porque el gobierno no obedeció al llama-



Un cartel preparado por la organización que representa a las mujeres indígenas de tierras bajas abrió la caminata. La pancarta no llegó a La Paz, ya que desapareció tras la intervención policial del 25 de septiembre.

do de los pueblos indígenas cuando lo convocamos para que dialogara con nosotros frente a frente”, afirmó Noe en la partida de la marcha.

Ese día las actividades se iniciaron a las 06.50. Las delegaciones comenzaron a concentrarse en la plaza principal Mariscal José Ballivián. Frente al atrio de la Catedral trinitaria y detrás de los carteles de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNA-MIB), de la Subcentral de Comunida-



El primer día de caminata dejó un saldo de decenas de caminantes deshidratados y agotados. Santa Avayo, del pueblo Guaraní, no soportó la primera etapa y requirió atención médica.





Desde el primer día la entereza de las madres y las embarazadas llamó la atención de quienes seguían la movilización, en algunos casos las críticas arrieron. Sin embargo, ellas siempre se mostraron ajenas a los cuestionamientos y cumplieron con su cometido sin reclamar tratos especiales.

Una bendición católica, otra ceremonia andina de agradecimiento a la Pachamama y el canto del Himno Nacional sirvieron como los elementos simbólicos que dieron inicio a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS y otras demandas.

des Indígenas Sécore-TIPNIS y de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), se veía gran cantidad de rostros juveniles, llenos de energía, con ropa delgada y en su mayoría llevando lo esencial en sus mochilas. La mayoría calzaba chinelas y vestía una gorra, o en otros casos un sombrero de jipijapa, o de saó que cubría sus cabezas y sus rostros del Sol.

La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) preparó el telón principal que encabezó la columna ese día: "VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS y la Dignidad de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco".

Un grupo de macheteros seguidos por la imagen de la virgen de Urkupiña, llevada en andas, precedió a esas organizaciones con la música de flautas y tamboritas.

Una vez que colocaron a la Virgen en el atrio de la Catedral, comenzó la cere-

monia de partida con el canto del Himno Nacional a capela. Una gran cantidad de medios de comunicación iniciaba su cobertura y algunas radios y canales de televisión transmitían en directo.

Ernesto Noe dio el primer discurso, luego habló Melva Hurtado, representante de las mujeres indígenas. La dirigente repudió las palabras del presidente Morales, quien días antes había encomendado a los cocaleros conquistar a las mujeres indígenas para que aceptaran el paso de la carretera por su territorio.

Luego, los principales dirigentes de la CIDOB, de las organizaciones regionales y del CONAMAQ pronunciaron encendidos discursos rechazando la intención del gobierno respecto del proyecto vial y reivindicando la movilización indígena.

El programa preveía una misa, pero el padre Tori Bravo sólo hizo un breve discurso y luego bendijo a los marchistas.

El 15 de agosto de 1990, unos 300 indígenas de tierras bajas partieron desde Trinidad para demandar al gobierno territorio y dignidad. 21 años después, la historia parecía repetirse.

Tras esa ceremonia, los integrantes de la delegación del CONAMAQ, vestidos con sus gruesos ponchos de lana de alpaca hicieron una ofrenda a la Pachamama. Tendieron tres aguayos en el suelo y pusieron un puñado de hojas de coca sobre cada uno. Los indígenas del oriente siguieron con atención la ceremonia.

Aproximadamente a las nueve de la mañana se formó la columna indígena y comenzó la travesía por la avenida Pedro Ignacio Muiba, líder mojeño que instauró el primer gobierno indígena en esa región a fines de la época colonial. La fila se hizo más larga con los caminantes de las subcentrales TIPNIS, Bella Selva, Cercado, Río Mamoré y Río Isiboro.

Una multitud de banderas bolivianas ondeaba y coloreaba la columna, también se veían varias banderas con el tradicional patujú y una wiphala identificaba al CONAMAQ.

Al salir de la capital beniana los marchistas fueron saludados por la población

que miraba desde las aceras. Alrededor de las diez de la mañana llegaron al monumento a Pedro Ignacio Muiba, en el límite urbano de Trinidad. Después de las palabras del presidente de la CI-DOB, Adolfo Chávez, la columna partió bajo un agobiante calor de más de 35 grados.

En la columna había jóvenes, niños de diferentes edades y bebés, que viajaban en brazos de sus mamás. Inés Vargas Yujo llevaba en su regazo a su hija de cuatro meses, Lorena. Llegaron a Trinidad desde Paraíso, una comunidad en el corazón del TIPNIS. “Estoy aquí para defender mi territorio”, dijo convencida.

En otra escuadra estaban los marchistas de mayor edad. Entre ellos, Ernesto Noe, uno de los impulsores de la marcha de 1990.

Los rayos del sol caían a plomo sobre las espaldas de los marchistas y recalentaba el asfalto del primer tramo. En esas condiciones, los indígenas necesitaban agua



Foto: Tomada del libro "Etapa de una larga marcha".

En 1990 marcharon por territorio y dignidad

Si se busca en el pasado reciente las huellas del movimiento indígena en defensa de su territorio y sus derechos, el vestigio más importante es precisamente la movilización a la que aludió el veterano Ernesto Noe.

El 15 de agosto de 1990 el contingente indígena de aproximadamente 300 personas salió de Trinidad rumbo a la sede de gobierno en busca del reconocimiento jurídico de sus territorios y el respeto a su dignidad.

Seis días antes que los caminantes llegaran a La Paz, el gobierno de Jaime Paz Zamora promulgó

varios decretos supremos con los que reconoció legalmente los territorios de algunos pueblos de tierras bajas, entre ellos el TIPNIS, el bosque Chimán y el territorio Sirionó.

La marcha de 1990 se realizó en un contexto diferente al actual. Gobernaba un régimen de coalición de los llamados partidos neoliberales. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora había logrado el tercer lugar de las elecciones de 1989 y llegó al poder apoyado por Hugo Banzer Suárez, el candidato de la conservadora Acción Democrática Nacionalista (ADN).

para paliar la sed. Algunos vehículos de las organizaciones indígenas regionales, destinados a tareas de apoyo, llevaban el líquido para los caminantes.

El gran esfuerzo físico tuvo consecuencias muy pronto. Al llegar a Puerto Varador, Santa Avayo, de 56 años, perdió el conocimiento. Fue atendida inmediatamente por la médica de la CIDOB, Moira Palacios, quien informó que a la guaraní le había subido la presión arterial. Avayo se recuperó después de los auxilios médicos.

Tres camionetas brindaron el apoyo logístico a los marchistas. Días después, al llegar a San Ignacio de Moxos la VIII Marcha contaba con 15 vehículos. Estos medios de transporte fueron importantes para el traslado del equipaje y los enseres de cocina, además de alimentos. En algunos tramos dificultosos también llevaron a mujeres, niños y ancianos.

La meta de ese día fue fijada en la localidad Los Puentes, a 16 kilómetros de Trinidad, en la ribera del río Mamoré y ca-

mino a San Ignacio de Moxos. Debido al calor y a la desigualdad de sus energías, los marchistas caminaron a diferentes ritmos y se dispersaron a lo largo de la carretera. El grueso de la columna llegó al borde del río entre las tres y cuatro de la tarde agotado y sediento en busca de descanso, alimentación y algo para beber.

Los pequeños establecimientos y quioscos que vendían comida en ese lugar de paso terminaron rápidamente sus existencias del día. La periodista de radio Deseo, Yolanda Mamani, originaria de La Paz, comentó que su cuerpo estuvo al borde de una descompensación hidrolítica como consecuencia de tomar casi dos litros de agua sin descanso.

A eso de las cuatro de la tarde, una vez que saciaron su hambre y tras un breve descanso, alrededor de 400 marchistas cruzaron el río en un pontón. El calor había menguado levemente. Desembarcaron y montaron el campamento cerca de la ribera. Otros 200 llegaron más tarde y cruzaron el Mamoré de noche.

Las palabras de la jornada

ERNESTO NOE, LÍDER QUE ENCABEZÓ LA MARCHA INDÍGENA DE 1990

“Quiero decirle al Presidente de la República que en Estados Unidos lo condecoraron como defensor de las tierras del mundo, ¿por qué en Bolivia, éste nuestro gobierno, quiere destruir nuestro territorio, nuestro hábitat, quiere destruir nuestro ambiente y nuestras comunidades? ¡Eso no puede ser! Nosotros no estamos de acuerdo”.



CELSO PADILLA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ

“Queremos decirle al gobierno que este es el Estado Plurinacional. Aquí están los 34 pueblos. Queremos decirle al presidente Evo Morales que el Estado se construye con estos pueblos. No se debe concentrar el poder solamente en la CSUTCB, en las ‘Bartolinas’ y en las comunidades interculturales. Que estos pueblos son los que lo han levantado y lo han llevado al poder. ¿Por qué se olvida tan rápido?”



RAFAEL QUISPE, TATA DEL CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QULLASUYU

“Hace 21 años los hermanos de tierras bajas iniciaron la marcha en esta plaza histórica. Después de 21 años otra marcha. ¿Cuál es la diferencia? Hace 21 años, un gobierno neoliberal y republicano. Después de 21 años, un gobierno con rostro indígena pero con mentalidad neoliberal. Ahora, tierras bajas con sus 34 nacionalidades y tierras altas con sus 16 suyus, representados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu”.



Foto: Tomada del libro “Etapas de una larga marcha”.

Ese gobierno tuvo la inteligencia política necesaria para no tensionar al máximo la relación con los indígenas durante la realización de la marcha. El presidente Jaime Paz, fue al encuentro de la columna indígena días antes de su llegada a La Paz y allí esbozó las bases del acuerdo que pondría fin al conflicto.



Foto: Tomada del libro “Etapas de una larga marcha”.

Cuando los pueblos pasaron de las cartas a la acción



Los indígenas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), realizan un tributo a la Pachamama para que la marcha sea protegida por esa deidad andina.

■ Cansados de la exclusión, manipulación y violación de nuestros derechos, junto a nuestros hermanos de otros pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, sus regionales y nuestra Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, hemos decidido tomar acciones de hecho en defensa de nuestro territorio, nuestras vidas, nuestra selva y nuestros derechos”.

Así, la III Comisión de la CIDOB decidió emprender la marcha hacia La Paz. La resolución, firmada el 25 de junio en Trinidad, denunciaba que los indígenas habían agotado casi todos los recursos para que el gobierno escuchara sus objeciones y desistiera de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio a través de la zona núcleo de su territorio, y que más bien lo haga por un trazo alternativo.

“Los pueblos indígenas habitantes del TIPNIS, hemos intentado en innumerables oportunidades hacernos escuchar por el gobierno, hemos sacado manifiestos y resoluciones fundamentadas de rechazo a la construcción de la carretera que nos pone al borde de la extinción sin resultado alguno”, justificaba el texto.

Los intentos por proteger el territorio a los que alude la resolución se remontan incluso antes de que el área protegida fuera declarada como parque en 1990.

Una de las gestiones más antiguas ante este gobierno data de abril de 2007, cuando la Subcentral del TIPNIS envió una carta al presidente Evo Morales en la que denunciaba el avasallamiento de ese territorio por los cocaleros

del trópico de Cochabamba y el incumplimiento del desalojo de los colonos asentados allí ilegalmente.

Además, le pedía a Morales que hiciera cumplir los acuerdos firmados entre indígenas y cocaleros— cuando él ya fungía como su dirigente— para evitar conflictos derivados de los avasallamientos. Por último, la Subcentral le solicitaba una audiencia para transmitirle de manera directa sus preocupaciones y buscar con él las soluciones.

Al año siguiente, el 4 de agosto de 2008, la misma organización envió otra carta al Presidente, con copia a la entonces titular de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), Patricia Ballivián. En la misiva expresaba su preocupación por la firma del convenio de construcción de la carretera. Además, recordaban a Morales que su gobierno debía respetar el derecho a la consulta previa: “No queremos pensar que usted Señor Presidente, está vulnerando las leyes que respaldan plenamente nuestro derecho a ser consultados y a participar de todo proyecto de infraestructura y más aún de un camino que parte en dos nuestro territorio (...). Acuérdesse que usted mismo reconoció con rango de ley a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, no los evada, no dé la espalda a su pueblo”.

Los indígenas advirtieron que denunciarían la vulneración de sus derechos. “Como esta actitud de ignorarnos, de obviar nuestros intereses, de pisotear nuestros derechos como dueños del territorio indígena (...) nos vemos obligados a denunciar a las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales sobre esta vulneración de nuestros derechos legítimos y damos a conocer que estamos asumiendo acciones de hecho”.

Seis meses después, en febrero de 2009, el gobierno otorgó el título ejecutorial de propiedad a la Subcentral TIPNIS. Paradójicamente en ese mes emitió un decreto supremo que instruía

Las palabras de la jornada



el inicio del proceso de contratación para la construcción de la carretera.

Al año siguiente, el oficialismo continuó gestionando la obra. En marzo, la Cámara de Diputados aprobó el protocolo suscrito por los gobiernos de Bolivia y Brasil para el financiamiento de la vía por 332 millones de dólares. En abril, el Presidente refrendó esa decisión promulgando la Ley 005.

En abril, el gobierno inauguraba en Tiquipaya la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. En esa reunión, más de 60 instituciones se manifestaron contra el proyecto vial.

Similar rechazo se asumió en el XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS, reunido el 18 de mayo 2010 en la comunidad de San Miguelito. "Estamos cansados de enviar cartas y resoluciones con nuestra posición de rechazo a la iniciativa de construir una carretera que une Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, [resoluciones y cartas] que jamás han sido atendidas ni escuchadas por los anteriores y el actual gobierno", indica el documento aprobado en el Encuentro. En su parte resolutive declara "estado de emergencia y movilización inmediata

y permanente para la defensa de nuestros derechos, la integridad territorial y los derechos de la Madre Tierra".

Sin embargo, al año siguiente, el 3 de junio de 2011, el presidente Morales colocó la piedra fundamental de la obra en un acto especial en el coliseo de Eterazama, Chapare.

Ese mismo mes, la Subcentral de Cabildos indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) emitió el "VOTO RESOLUTIVO 4 " sobre el proyecto carretero, en el que demandaba al gobierno respetar el derecho de consulta previa antes de iniciar un proyecto, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales que amparan a los pueblos y comunidades indígenas.

La Subcentral del TIM también respaldaría todos los puntos de la resolución aprobada el 25 de junio por la III Comisión de la CIDOB. Ese documento planteaba inicialmente que la marcha partiera desde Villa Tunari el 2 de agosto. En una nueva reunión, los indígenas decidieron iniciar la movilización desde Trinidad y fijaron la fecha para el 15 de agosto. Además, definieron inicialmente una plataforma con 13 demandas. El TIPNIS era el primer punto de ese documento.

JUSTA CABRERA, PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS DE BOLIVIA

"Señor Presidente, las mujeres indígenas de tierras bajas queremos exigirle respeto por lo que usted dijo, que quería venir a conquistar a las mujeres del TIPNIS. Con eso usted quiere decir que las mujeres de las tierras bajas somos fáciles, que van a venir y nos van a echar de espaldas y ya, con eso nos van a conquistar para abrir la carretera. Pero no se le hizo señor Presidente. Usted debe bajar y pedir perdón a las mujeres".



ADOLFO CHÁVEZ, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA

"Si el Presidente quiere continuar la construcción de la carretera, que retire la carta que dirigió a todos los pueblos del mundo haciendo creer que es conservacionista y que respeta la conservación y los derechos de la Madre Tierra. Estos derechos los vamos a hacer respetar. Esta marcha no tiene ni un pedacito de tinte político. Porque no estamos para hacer mal lo que están haciendo los ministros".



16 organizaciones de tierras bajas y 1 de tierras altas



En su inicio, la VIII marcha indígena contó con la participación de al menos diez organizaciones de indígenas de tierras bajas y una de tierras altas (CONAMAQ). En los siguientes días se incorporaron otras organizaciones con las cuales al cantidad se elevó a quince. La resolución de convocatoria a la movilización, aprobada

por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), instruyó la participación de los 34 pueblos indígenas del oriente, Chaco y la Amazonía, además de las centrales, subcentrales, consejos y cabildos comunales.



Estas son las organizaciones que estuvieron en la marcha:

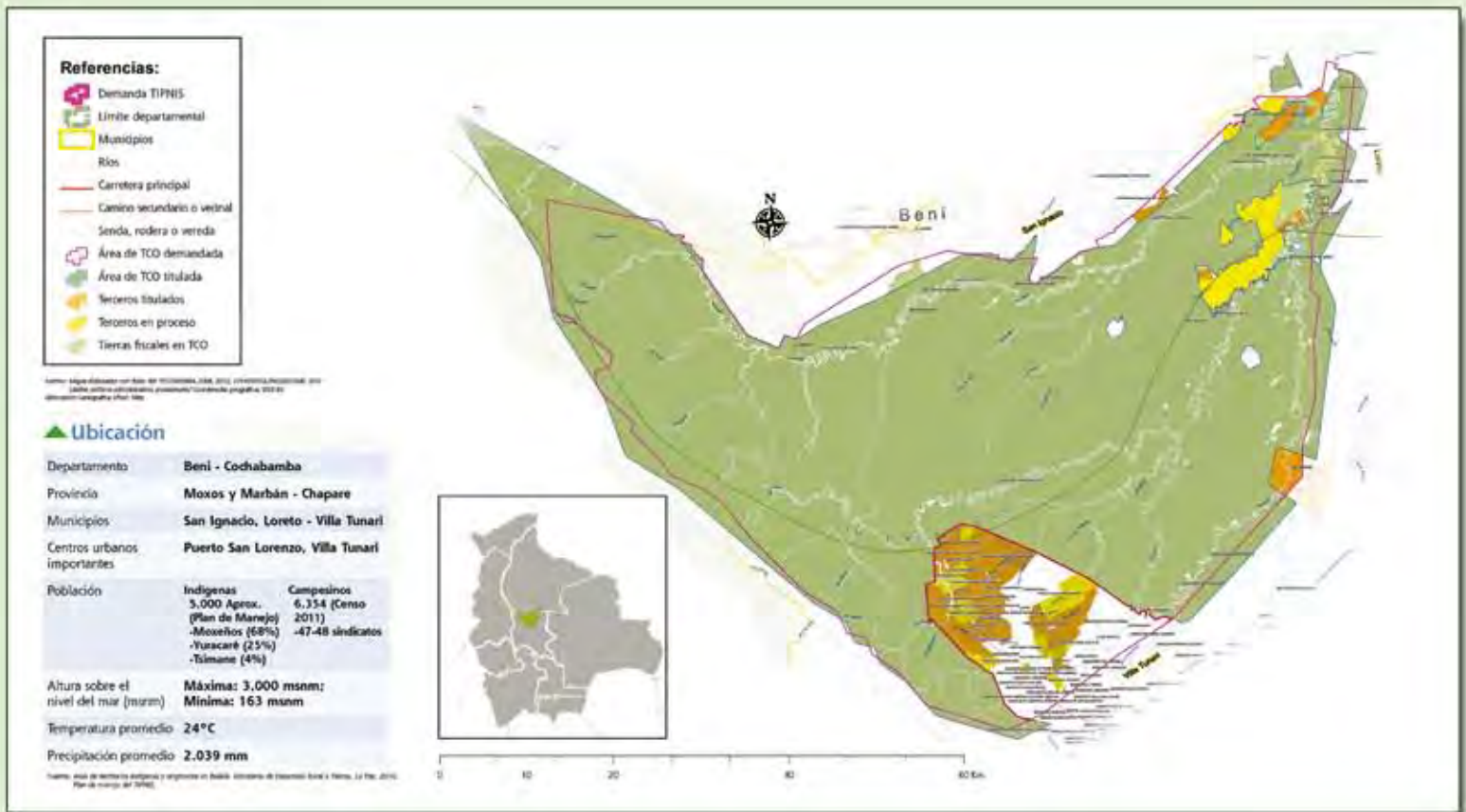
- Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
- Subcentral TIPNIS
- Asamblea del Pueblo Guarani (APG)
- Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)
- Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
- Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
- Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

- Organización Indígena Chiquitana (OICH)
- Subcentrales Bella Selva, Cercado, Río Mamoré y Río Isiboro, todas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)
- Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B)
- Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)
- Subcentral de Comunidades Indígenas Sécure-TIPNIS
- Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB).

En los siguientes días se incorporaron delegaciones de las siguientes organizaciones:

- Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando (CIPOAP)
- Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO)
- Territorio Indígena Multiétnico (TIM)
- Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI)

TCO Tipnis



Historia del TIPNIS: Desde el comercio con los incas a las movilizaciones indígenas

SIGLOS XVII – XVIII

Las misiones

Antes de la llegada de los españoles, los indígenas de las llanuras de Moxos, cuya superficie se extendía hasta la parte inferior del TIPNIS, mantuvieron una relación comercial con los incas.

A poco de su llegada a la zona, el orden jesuita empieza a fundar misiones como las de Loreto (1682), Trinidad (1686), San Ignacio (1689). Los religiosos introducen el sistema de cabildo para regular las relaciones políticas y sociales de los asentamientos, y pactan con la Corona española el manejo autónomo de la región evangelizada y el respeto de la propiedad indígena sobre el territorio, lo cual genera cierta paz social en la región. En 1767 el Reino de España expulsa a los jesuitas de América y termina la época misional.

SIGLO XIX

Los abusos coloniales y republicanos, la búsqueda de la Loma Santa

Con la ocupación de la zona a cargo del gobierno

colonial, la población local es sometida a maltratos y explotación que, sumados a la debilidad política de la Corona, desembocan en la rebelión encabezada por Pedro Ignacio Muiba en 1810. Debido a los abusos que continuaron durante la época republicana —agudizados por el auge de la goma—, los indígenas ofrecen cierta resistencia, pero la mayoría comienza a abandonar los centros urbanos hacia tierras chimanes y del Isiboro Sécore, con lo que renace el mito de la búsqueda de la Loma Santa. La huida provoca una dura represión de las autoridades y el surgimiento de un movimiento de resistencia conocido como la “Guayochería”.

SIGLO XX

Creación del Parque Nacional y colonización

En 1965 el gobierno crea el Parque Nacional Isiboro Sécore y a la par emprende un nuevo programa de colonización en Alto Beni, Yapacaní y Chapare. En esa última región, a fines de esa década, se funda la Federación Especial Agraria de Trabajadores

Campesinos del Trópico de Cochabamba (refundada en 1975).

Evo Morales comenzó su carrera como dirigente en dicha federación, hasta convertirse en su líder, diez años después. En la década de los años ochenta, las organizaciones indígenas de tierras bajas inician la lucha por el reconocimiento de sus territorios y fundan la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en 1982.

Movilizaciones populares

En 1988 se crea la Subcentral de Cabildos Indígenales. Luego tomó el nombre de Subcentral TIPNIS. En agosto de 1990, junto con otras organizaciones similares comenzó la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad que obtuvo, entre otras cosas, el Decreto 22610 que “reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécore como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan”.

En 1997 el SERNAP y los indígenas inician la co-gestión del territorio.



San Ignacio



El primer intento por frenar la caminata

La ciudad más importante para los mojeños benianos fue la más hostil. Los habitantes y las autoridades, en su mayoría cercanos al MAS, apoyaban la obra e intentaron detener la movilización con un bloqueo carretero.

Minutos antes de las diez de la mañana del 19 de agosto, desde una camioneta que circulaba por la plaza de San Ignacio, uno de los pasajeros convocaba a través de un megáfono a la población para que ésta se sumara al bloqueo, instalado en la salida de esa población sobre la carretera a San Borja. El cierre de vías buscaba amedrentar a la Octava Marcha Indígena. En esa localidad beniana se dio el primer intento por detener la movilización, a sólo 92 kilómetros de su partida.

La medida en contra de los indígenas no era casual. La mayoría de los ignacianos manifestaban su apoyo la construcción de la proyectada vía porque

ésta uniría su pueblo con la localidad chapareña de Villa Tunari.

En todo caso, intentando ignorar el cierre de la vía y el mal ánimo de la gente, la marcha indígena llegó a San Ignacio a las diez de la mañana.

Los marchistas, agotados por el calor y la caminata de más de 20 kilómetros, ingresaron a la plaza central precedidos por un grupo de indígenas vestidos como macheteros mojeños. De ese modo, éstos daban la bienvenida a los casi mil marchistas ostentando la danza más importante de la región.

A pocos pasos de los macheteros, un pasacalle colgaba sobre la calle. El mensaje no podía ser más claro. “Los mojeños

queremos carretera. Fuera autoridades locales y departamentales, traidores de las bases y del pueblo mojeño. Carretera San Ignacio-Villa Tunari, sí o sí, carajo”

Los ignacianos tenían la expectativa de que en su localidad se llegara a un arreglo, así que, además de preparar el recibimiento a los marchistas, invitaron a los congresales indígenas a que ahí iniciaran el diálogo con el gobierno.

Simultáneamente, encomendaron al presidente de la Asamblea Legislativa del Beni, Alex Ferrier, para que ese mismo día solicitara al presidente Evo Morales su presencia en la población.

Según el párroco ignaciano, Franz Bejarano, la idea inicial era ofrecer a ambas partes las mejores condiciones para entablar las conversaciones en paz y armonía. No obstante, la población transmitía señales contradictorias.

La Central Obrera Regional (COR), en un cabildo celebrado el 14 de agosto, había decidido recibir “como hermanos” a los marchistas y —en la misma línea que las autoridades— confiaba en que el problema se resolviera en esa localidad.

“No deseamos que los compañeros pasen de San Ignacio. Que las autoridades nacionales bajen aquí, y que aquí, como decimos, se cocinen las papas y lleguemos a un consenso”, informaba ese día el ejecutivo de la COR, Wálter Colque. Empero, los trabajadores también organizaron un bloqueo para impedir a los indígenas salir de San Ignacio.

Por eso, salvo la demostración de los macheteros y el repique de campanas de la iglesia, la bienvenida ciudadana fue hostil. Cuando los indígenas daban una vuelta por la plaza algunas personas corearon estribillos a favor de la obra y en contra de la demanda indígena. Los opositores expresaron su posición con carteles escritos a mano, con inscripciones como: “Sí o sí a la carretera” o “Aquí



Los ignacianos esperaron a los indígenas en la plaza. Criticaron la participación de marchistas cruceños y de otras regiones.

estamos los que queremos la carretera a Cochabamba”.

Tras una breve charla con las autoridades locales en las puertas del templo, la columna siguió rumbo a la maestranza de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), ubicada a medio kilómetro del bloqueo carretero sobre el camino a San Borja.

Minutos antes habían llegado a San Ignacio el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y el de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, acompañados por el Presidente de la ABC, Luis Sánchez. La cita entre ellos y los marchistas había sido fijada para las dos de la tarde de ese



Gobierno en San Ignacio: Cinthya Silva, viceministra de Medio Ambiente, Carlos Romero, entonces ministro de la Presidencia, y Walter Delgadillo, de Obras Públicas

El ministro Carlos Romero aseguró que el gobierno construiría la carretera a pesar de la movilización.

mismo día en un salón de la Escuela de Música.

Las autoridades acudieron a la cita y compartieron mesa con el presidente de la Asamblea Legislativa del Beni, el Subgobernador y el Corregidor de San Ignacio. Los indígenas no asistieron.

Antes del encuentro, Romero había anticipado que si bien escucharía a la población local y a la indígena, la carretera se construiría de todos modos: "El desafío es el de compatibilizar ambas cosas; primero salvaguardar el hábitat

de los pueblos indígenas, recoger sus preocupaciones, pero al mismo tiempo converger en el interés estratégico del desarrollo de la región".

En la Escuela de Música, el Ministro sólo pudo escuchar a algunos dirigentes locales y ciudadanos que apoyaban la carretera. El presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio, Miguel Arias Díez fue uno de los principales defensores de esa posición.

Desde el campamento, los indígenas justificaron su ausencia a través del presidente de los guaraníes, Celso Padilla: "Hemos decidido que no queremos la presencia del ministro de la Presidencia, Carlos Romero, porque lo consideramos persona non grata".

Padilla reiteró que los indígenas tenían la intención de dialogar, pero con el presidente Evo Morales y sin la participación de Romero. Así lo expresaron en una carta dirigida a la comitiva del Ejecutivo.

Al caer la tarde, el titular del legislativo departamental, Alex Ferrier, visitó el campamento indígena y reiteró la invitación al diálogo. El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, dijo que no podía responder a título personal y ne-

Las paradas entre Trinidad y San Ignacio

Desde Trinidad, la columna indígena acampó en cinco lugares antes de llegar a San Ignacio de Moxos:

LUNES 15 DE AGOSTO:

Salida de Trinidad a las 10.00 y llegada a Los Puentes a las 14.30, aproximadamente.

MARTES 16 DE AGOSTO:

Partida de Los Puentes en la madrugada y arribo cerca del río Tijamuchí.

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO:

Llegada a la comunidad Fátima de Moxos.

JUEVES 18 DE AGOSTO:

Llegada a la comunidad Samayairí.

VIERNES 19:

Caminata entre las seis y diez de la mañana hasta San Ignacio de Moxos.



Una pedrada destrozó el parabrisas de uno de los vehículos que apoyaba a la marcha.

cesitaba conocer el criterio de las bases, que tomarían la decisión en una asamblea interna. En todo caso, pidió que la autoridad garantizara la seguridad del campamento —se temía la agresión de los bloqueadores— y gestionara el levantamiento del corte de la ruta a San Borja. Ferrier respondió que un contingente policial destacado desde Trinidad se apostaría alrededor de la maestranza para prevenir una intervención violenta.

Minutos después, unos 15 policías instalaron un cordón de seguridad frente a la puerta de ingreso del campamento. En el transcurso de la noche, San Ignacio fue azotado por un temporal de lluvia y agudo frío, comúnmente conocido como surazo. Muchos de los indígenas que dormían a la intemperie, sobre todo los niños, se resfriaron.

Al día siguiente, sábado, los ministros respondieron con una conferencia de

prensa a la carta que los indígenas les habían enviado en la víspera. La comisión ratificó la predisposición gubernamental al diálogo y pidió a los marchistas que mandaran al Ejecutivo los 16 puntos de la plataforma de demandas. Carlos Romero añadió que desconocía las peticiones, pese a que éstas habían sido difundidas ampliamente desde finales de julio. Después de leer la misiva, el Ministro declaró que esperaba a los dirigentes para coordinar un encuentro con el Presidente en el Palacio de Gobierno, en La Paz.

Ese mismo día, los ignacianos levantaron el bloqueo, pero los indígenas decidieron esperar hasta el lunes, porque consideraban que Evo Morales acudiría a reunirse con ellos. El Presidente no fue, así que a las seis y media de la mañana del 22 de agosto los marchistas reanudaron su camino. Ese mismo día, el presidente Morales se reunió en Villa Tunari con representantes del Consejo Indígena del



Trinidad solventó la logística de los primeros días

Las contribuciones de la ciudadanía de Trinidad ayudaron en la manutención de los indígenas en las primeras etapas de la movilización. Instituciones y personas particulares de la capital beniana donaron vituallas y víveres, según la técnico responsable de logística de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Rosalía Matene.

Los aportes recibidos días antes del inicio de la marcha, sólo alcanzaron para cubrir las necesidades de la primera jornada, informó Matene. Entonces la provisión de alimentos y agua para los siguientes días se planteó como un problema que requería urgente solución.

Tras la decisión de llevar adelante la Octava Marcha Indígena, a fines de julio, los dirigentes de la CIDOB y de las organizaciones regionales que participarían en la manifestación enfrenta-

ron el reto de financiar la caminata. Entre los principales detalles organizativos se contaban la instalación de los campamentos, la alimentación y la atención de la salud de los marchistas.

El trayecto entre Trinidad y San Ignacio fue muy duro, recordó. Adicionalmente a los problemas de recolección de víveres, la cantidad de marchistas crecía y se incrementaban las necesidades de alimentación y agua.

¿Cómo financiaron la manutención de los marchistas durante esos días? Según Matene, las instituciones y algunas personas particulares de Trinidad volvieron a apoyar a los marchistas, aunque algunas organizaciones que anunciaron su ayuda no cumplieron con su palabra. “Instituciones, como el sindicato del magisterio, nos prometieron ayuda pero ésta nunca llegó”.

San Ignacio conserva una riqueza musical de cuatro mil partituras del TIPNIS



Sur (CONISUR), organización que nuclea a comunidades del sur del TIPNIS y que fueron absorbidas por los sindicatos cacaleros de esa región y que protagonizaron una marcha en defensa del proyecto carretero, entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

El día anterior a su partida, los indígenas recibieron una noticia fatal. El domingo murió Pedro Moye Noza, un adolescente de 14 años, que días antes había caído de una camioneta y que luego fue trasladado a un nosocomio de Trinidad en estado de coma.



El desafío con la logística fue grande. La actividad comenzó con el desplazamiento de las delegaciones desde sus lugares de origen en días previos, de tal forma que el domingo 14 de agosto alrededor de 800 personas se concentraron en Trinidad. Al día siguiente partieron desde allí rumbo a La Paz, aunque sin resolver del todo los pormenores logísticos.

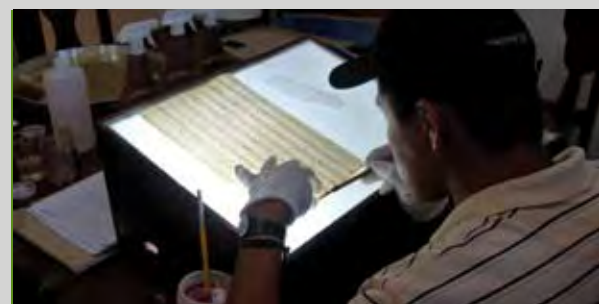
“El 13 y 14 de agosto me sentía muy preocupada porque estábamos solos en la CPEM-B. Ya la [reunión de la] IV Comisión había decidido que nos apoyaran todas las regionales que

participaban en la marcha, pero hasta el 13 de agosto no había llegado gente a Trinidad. Sólo el 14 de agosto llegaron compañeros del CONAMAQ, de la APG, de la OICH y de la regional de CPITCO”, comentó la técnica.

En los días siguientes, otras regionales se sumaron a la columna y cuando ésta llegó a San Ignacio, quince camionetas cumplían con el trabajo logístico. Los vehículos transportaban alimentos donados por la población trinitaria y comprados con recursos propios de la marcha.

San Ignacio de Moxos guarda un tesoro de música misional con más de siete mil partituras. Las piezas corresponden a tres colecciones: de Trinidad, de San Ignacio y del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Alrededor de cuatro mil de esas partituras pertenecen a las comunidades del TIPNIS, explicó el responsable del archivo de música de Moxos, Juan Francisco Limaica.

A partir del siglo XVIII, los religiosos guardaron muchas de las partituras en el templo de San Ignacio de Moxos. Durante ese tiempo las usaron para los coros religiosos. La mayoría de esas obras musicales datan del siglo XIX, según el experto.



A principios del siglo XIX, a consecuencia de los movimientos independentistas, los indígenas huyeron al monte y se llevaron parte de las partituras, relata el experto. Pasada esa época las familias conservaron las piezas y las heredaron de padres a hijos, de abuelos a nietos y así sucesivamente hasta nuestros días. En algunos casos las partituras se perdieron o terminaron muy dañadas porque sus ocasionales poseedores no sabían de su valor ni cómo conservarlas en un ambiente húmedo y extramadamente caliente, como ocurre con la Amazonía.

En 2006, gracias a un proyecto externo, el museo de San Ignacio y la iglesia Católica recopilan las piezas para guardarlas en el archivo musical de San Ignacio, previo un “proceso de conservación preventiva”, acota el conservador.

La colección de los libros de canto pertenecientes al TIPNIS también forma parte del archivo. La mayoría están escritos en latín. “Sólo algunas piezas fueron escritas en idioma trinitario”, explicó Limaica.

El archivo está instalado en el inmueble del Museo de Moxos cuyo nombre en el idioma mojeño ignaciano es Viñupa paica eta vitaresita y en español quiere decir “Recogiendo nuestra vida”, según Sheila Villar, responsable y guía del mismo.

Ese equipamiento se abrió con dos salas como museo de arte sacro en 2002, cuando San Ignacio recibió las obras de restauración del templo. Gracias a un proyecto de ampliación, en 2008 se reinauguró el museo con 13 salas. En 2009 se abrió la sala del archivo histórico, informa Villar.



Adolfo Chávez, su paso por el Ejército, la religión y la dirigencia



ADOLFO CHÁVEZ
PRESIDENTE DE LA CIDOB

Antes de compartir parte de la historia de su vida, Adolfo Chávez Beyuma pidió un momento de descanso tras el doloroso cambio de vendas que cubrían las heridas de su brazo derecho. Fue en las primeras horas del 22 de septiembre en la llanura beniana. Era uno de los principales dirigentes de esa movilización en su calidad de Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Aunque siempre aclaró que él no dirigía la marcha. “El pueblo la comanda, yo la acompaño”.

En marzo de 2011, Chávez sufrió un accidente automovilístico que partió en tres el húmero de su brazo derecho. Los traumatólogos le colocaron una varilla metálica fuera del brazo, la cual mantenía unido el hueso mediante tres delgadas barras de metal que penetraban la piel y los tejidos musculares, y se insertaban en las piezas óseas. Esas barras provocaron heridas que requerían un periódico cambio de vendajes, labor que durante la marcha cumplió la médica de la CIDOB, Moira Palacios.

Sentado en un banco al pie de un árbol, con la cabeza descubierta y el cabello despeinado, comentó que provenía de una familia mojeña por parte de padre y takana por parte de madre, que nació en la provincia Iturrealde de La Paz, aunque allí vivió sólo sus cuatro primeros

años, y que luego migró a la localidad Tumichucua, en la provincia beniana de Vaca Díez.

Adolfo Chávez es el mayor de cuatro hermanos, tres varones y una mujer. La muerte de su madre, cuando él tenía 15 años, afectó profundamente a los hermanos Chávez. Contaban con el apoyo económico de su padre, pero en lo afectivo se les hizo difícil enfrentar la vida sin su mamá. “Fue muy difícil aceptar para nosotros que mi madre hubiera muerto”.

A esa temprana edad decidió prestar el servicio militar. El alejamiento no le impidió cuidar a su familia: “Me apreciaban mucho en el cuartel y me daban libre los viernes para ir a visitar a mis hermanos. Caminaba cuatro horas desde el cuartel a Tumichucua para estar sábado y domingo con ellos”.

Tras salir de la milicia, volvió al colegio, pero tuvo que alternar su educación con dos empleos, uno en la mañana y otro por la noche. Con ese ritmo de vida, no lograba cumplir con sus tareas escolares ni estudiar adecuadamente, así que daba exámenes de memoria. “Mis notas eran de la cabeza, pero valió la pena el esfuerzo”.

Flamante bachiller, decidió hacer realidad el sueño de su vida: seguir la carrera militar. En 1991 dio el examen de admisión y lo aprobó, “pero la plata faltó”.

Después de esa decepción, nació su vocación religiosa e ingresó al instituto Alborada de Guayaramerín para formarse como pastor evangélico. Tampoco concluyó esa carrera.

Con ambas frustraciones en el espíritu, decidió cumplir un último deseo de su madre: conocer a la familia materna en Tumupasa, especialmente al abuelo Calixto Yuma, ex combatiente de la Guerra del Chaco. Luego de tantas penalidades, el recibimiento caluroso de una familia casi desconocida y los apacibles días en la Amazonía paceña, alternados con los relatos de guerra de su abuelo, lo animaron a quedarse a vivir.



Su vocación de líder, que ya se había manifestado en el centro de estudiantes de su colegio en Riberalta y en su trunca carrera religiosa, renació en Tumupasa. Allí, se convirtió en representante de la Organización Territorial de Base (OTB) local.

Desde su cargo, debió enfrentar el avasallamiento de las empresas madereras sobre la zona norte de la región. Su desempeño exitoso en ese come-

tido lo catapultó a formar parte en 1997 de la recién fundada Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). Allí comenzó su carrera dirigenal hasta convertirse en secretario de Tierra y Territorio de esa entidad.

Dos años después volvió a la carga en defensa del área comunal de Tumupasa, amenazada nuevamente por el avasallamiento de las concesiones madereras. "Tuvimos que entrar todos los hermanos takanas, decididos a morir para hacer retroceder a los empresarios".

Gracias a esos exitosos antecedentes, fue reelecto en el cargo que ocupaba en la CPILAP. Estuvo ahí hasta 2002. Según él, ese año tuvo que alejarse debido a una crisis dirigenal en la CIDOB.

Ese mismo año, partió a La Paz y fue contratado por el Viceministerio de Tierras como Director de la Unidad Territorial. Antes de cumplir un año en esa oficina, renunció porque prefirió "volver a la lucha junto con los indígenas", esta vez, para impulsar la participación de sus compañeros en la Asamblea Constituyente.

Su retorno a la vida dirigenal fue auspicioso. Pasados pocos años, en 2006, presentó su candidatura a la presidencia de la CIDOB en representación de la CPILAP. La Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas (GANPI) lo eligió y fue posesionado en Santa Cruz, el 25 de julio. "Gracias a Dios, se nos da la oportunidad y ahí afianzamos un liderazgo". Tras cumplir su período de mandato, fue reelecto para otra gestión de cinco años, en noviembre de 2010.

Aún estaba fresca la experiencia de la Séptima Marcha y pocos se imaginaban que la amenaza sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure obligaría a los pueblos de tierras bajas a volver a las carreteras del país. La población boliviana siguió con interés durante 66 días a los caminantes hasta su llegada a La Paz. El desenlace fue la aprobación de la Ley 180 de Protección del TIPNIS, el 24 de octubre de 2011. Durante el acto de promulgación de la norma en el Palacio de Gobierno, Chávez brindó un emotivo discurso, sólo interrumpido por sus sollozos apenas reprimidos: "Cuántas voces, el llanto, en el monte nos hicieron escuchar. Momentos de desesperación para poder reencontrarnos... no jueguen, no nos tomen como enemigos. Somos sus hermanos... de carne y hueso".

Reacciones como la de esa noche no son extrañas en este dirigente. "Ver que la desgracia acompaña a hermanos inocentes es difícil de comprender. Uno, con mucho trabajo y de la mejor forma, ha querido aportar a este Estado plurinacional. En otras palabras, uno queda decepcionado y esa carga, que se cruza con la desesperación, se convierte en llanto. Cuánto hemos apostado todos los bolivianos para que este Estado plurinacional sea más sensible".

Pese a las complicaciones que pueda sufrir por la fractura de su brazo, Adolfo Chávez desea culminar su segundo mandato al frente de la CIDOB, en 2015. "Tengo 40 años cumplidos, y si Dios nos permite vamos a salir de 45 años para irnos a descansar a nuestra casa".

Puerto San Borja





Foto: ABI

Cuando los marchistas jalaron a sus dirigentes

Los marchistas de base dieron impulso a la marcha indígena. Cuando detectaron dudas entre sus dirigentes impulsaron la movilización con más ahínco. En el Beni, la gente tuvo que luchar contra la desazón que provocaban los diálogos estériles.

Expulsados por un frío surazo, los indígenas dejaron San Ignacio de Moxos a las seis y media del lunes 22 de agosto y dirigieron sus pasos por la polvorienta carretera beniana hasta Puerto San Borja. Como ya era costumbre, caminaban impulsados por la música de las tamboritas (tambores y flautas) y al ritmo marcado por hombres y mujeres más jóvenes.

La movilización llegó a Puerto San Borja a la una de la tarde, tras recorrer 20 kilómetros de la ruta. Esta comunidad mojeña se encuentra a orillas del río Apere y pertenece al Territorio Indígena Multiétnico (TIM).

Los indígenas tenían previsto descansar en este lugar y continuar la movilización

en la madrugada del martes. Sin embargo, tras una asamblea general realizada al atardecer la decisión cambió. Los caminantes se quedarían en el lugar para reponer fuerzas, ya que el surazo había quebrantado la salud de niños, jóvenes y adultos.

Argumentos similares justificaron la paralización por dos días más. Esta situación comenzó a inquietar a los caminantes. “Los compañeros no quieren detenerse. La gente no tiene muchos recursos y cada día que pasa sufre por eso”, dijo un marchista que engrosaba las filas del CONAMAQ.

“Los compañeros de base estaban muy interesados en caminar, ellos presionaban a sus dirigentes”, recordó Olga Flores, activista de derechos humanos y que participó en la marcha desde el 15

de agosto, cuando la columna partió de Trinidad.

El ambiente de intranquilidad encontró sosiego porque los marchistas decidieron esperar a una comisión de gobierno que había anunciado su arribo para el jueves.

En esa ocasión, el presidente de la CI-DOB, Adolfo Chávez, señaló: "Aceptamos el diálogo, pero insistimos que debe realizarse con el presidente Evo Morales, él tiene que bajar a la marcha, al punto que diga. Rechazamos la presencia del ministro de la Presidencia, Carlos Romero".

Pero el comentario de Chávez, como ya estaba casi cantado, cayó en balde roto. El jueves a las 17.50, de las vagonetas que trasladaron a los funcionarios públicos a Puerto San Borja, no salió el Presidente.

En la comitiva de ministros estaban Wálter Delgadillo de Obras Públicas; Teresa Morales, de Desarrollo Productivo; los viceministros, de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, y el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez.

Sin embargo, los indígenas habían pedido la participación de diez dignatarios estatales para armar mesas de trabajo encargadas de solucionar las 16 demandas de la Octava Marcha.

La tensión se palpaba en el ambiente. Las autoridades llegaron hasta el patio



La comunidad mojeña de Puerto San Borja está asentada a orillas del río Apere y forma parte del Territorio Indígena Multiétnico (TIM).

del puesto médico del poblado. Los indígenas no los dejaron entrar a la posta, que se convirtió en una suerte de cuartel general de los líderes de la marcha.

Los funcionarios estatales ingresaron al patio tras desfilarse por un callejón, abierto por los guardias indígenas, que separaba a la comitiva del resto de caminantes, quienes observaron atentos los sucesos de esa noche. Los jóvenes custodios portaban orgullosos sus arcos y flechas de madera.

Antes de iniciar la reunión, los dirigentes discutieron en voz baja pues no lograban decidir si aceptaban o no a la comitiva que consideraban incompleta por la au-

sencia de los ministros. Además, esperaban que el presidente Morales comprometiera su arribo a la comunidad Totaizal, el subsiguiente punto de descanso.

Los ministros intentaron persuadir a los indígenas. Delgadillo dijo que la comitiva estatal era una oportunidad que no debían desaprovechar. Esta frase molestó a la mayoría de los marchistas. Algunas personas lo calificaron de soberbio.



En Puerto San Borja tampoco prosperó el diálogo. Los marchistas esperaban la visita de diez ministros, pero sólo llegaron dos





Las noticias que publicaban los medios de comunicación interesaban a las bases. En la noche, los marchistas leían las informaciones y, así, se enteraban qué decía el gobierno sobre su movilización; como se observa en la fotografía de la izquierda, tomada en la comunidad de Santa Ana de Moseruna.

Los indígenas esperaban la participación de diez ministros, para garantizar que las autoridades asumieran compromisos serios que permitieran solucionar las demandas de la marcha.

Para calmar los ánimos, Teresa Morales aseguró que tenían la instrucción de trabajar día y noche hasta solucionar las demandas. Los indígenas no creyeron en esas palabras. Celso Padilla, de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG); Rafael Quispe, del CONAMAQ; y el propio Chávez les echaron en cara lo que consideraron como una guerra de agravios del gobierno para descalificar la marcha. “El Presidente nos insulta y quiere amedrentar a la marcha. Pero no lo va a lograr”, dijo Quispe.

Casi a las nueve de la noche un dirigente sugirió la retención de los ministros hasta la llegada de Morales. El temor se apoderó de las autoridades, quienes finalmente dejaron el lugar escoltados por la guardia indígena, subieron a los vehículos oficiales y partieron raudamente hacia San Ignacio de Moxos. Antes de partir, dirigentes y autoridades declararon un cuarto intermedio hasta las primeras horas del 26 de agosto.

DE MADRUGADA

Los indígenas quedaron alterados, pero una asamblea calmó los ánimos y la gente se fue a dormir. En la madrugada, antes de que saliera el sol, la movilización dejó Puerto San Borja. Algunos testigos luego contarían que los indígenas de base ya no querían esperar más, tras enterarse, por los medios de comunicación, la confirmación de que el Presidente no enviaría a los diez ministros.

Y una vez más, el viernes 26, el bloque de banderas bolivianas, blancas con el patujú pintado a mano y una whipala de CONAMAQ avanzó 18 kilómetros hasta llegar a la diminuta comunidad de Santa Ana de Moseruna.

En la noche, Adolfo Chávez explicó por qué habían dejado Puerto San Borja. “Ellos [los ministros] no llegaron a la hora acordada [6.30]. Si no podían estar a esa hora, mínimamente tenían que enviar

Los caminantes querían recorrer más kilómetros y no esperar más a las autoridades. “Los dirigentes tienen que escucharnos: ¿por qué tenemos que insistir en el diálogo cuando nos siguen insultando?”

una comisión antes de que se cumpliera el plazo del cuarto intermedio.”

Mientras Chávez dialogaba con los periodistas, una improvisada asamblea de marchistas de base debatía sobre su situación. La gente estaba molesta y cansada porque la marcha se estancaba varios días en un mismo sitio.

“Tenemos que seguir caminando. Si el Presidente no quiere venir, nosotros iremos a La Paz”, comentó uno de ellos. Otra señora pidió: “Los dirigentes tienen que escucharnos: ¿por qué tenemos que insistir en el diálogo cuando nos siguen insultando? Falta comida y agua, hay niños enfermos y estamos cansados. No podemos seguir quedándonos en un mismo lugar”. Criterios similares caldearon más los ánimos.

Celso Padilla, presente en el encuentro, anunció que tendría una reunión con la dirigencia para atender esa preocupación de las bases. Sin embargo, el plan del guaraní molestó aún más a los presentes: esta vez querían participar en la reunión y conocer qué cosas influían en las decisiones de sus líderes.

La impaciencia por los días perdidos no pudo más. A la una de la mañana del domingo 28 el sonido de un petardo acabó con el sueño de los marchistas y, como una orden espontánea, los movió a levantar el campamento de prisa para reanudar camino. La sorpresa inicial cedió a la disciplina y así cada uno se ubicó en su acostumbrado lugar en la columna, listo para una nueva jornada.

“Las señoras sufrieron mucho, porque tenían que despertar a sus hijos, quienes lloraban porque tenían que dejar de dormir cuando estaban más cansados”, recordó Yolanda Mamani, una periodista de radio Deseo y que cubrió la marcha desde su inicio.

El recorrido de esa noche fue uno de los más difíciles, según ella. El siguiente punto de descanso estaba a más de 50 kilómetros de distancia, cuando el promedio de caminata diaria era de unos 20 kilómetros.

Los dirigentes comprendieron la magnitud del reto asumido por los marchistas y decidieron llevar a los ancianos y niños



En la noche, para evitar el calor amazónico

La primera jornada de caminata, el 15 de agosto, la marcha recorrió la carretera beniana bajo un tenaz sol que caldeaba la ruta con sus 36° C. Los indígenas llegaron al punto de descanso con los últimos restos de energía. Cuadros de insolación, quemaduras, deshidratación y el desmayo de una señora de más de 50 años fueron los saldos de esa fecha.

Para exorcizar los estragos sufridos ese primer día, el comité político decidió que, en adelante, las caminatas serían de noche para aprovechar las horas más templadas de la jornada. Esta medida tenía una dificultad: ponía en riesgo la in-

tegridad física de los caminantes. Por ello, para evitar accidentes automovilísticos, el Comité de la marcha consiguió algunas linternas para los líderes de la columna.

Posiblemente, la precaución ayudó, ya que ningún automóvil arrolló a los indígenas. Sin embargo, una de esas noches, el haz de luz de las linternas iniciaron una tragedia.

Los marchistas dirigían sus pasos a la comunidad Totaizal, cuando se encontraron con un hato de reses que deambulaba por la berma del camino. Los animales reaccionaron con furia contra las

Acusación



en los coches de apoyo hasta casi la mitad del tramo previsto. De ese modo evitaron rezagos en la caminata.

El contingente llegó el sábado a Totaizal, la gente estaba agotada y hambrienta. Los dirigentes sabían que la comida no era suficiente y cuando eran entrevista-

dos por los medios de comunicación solicitaban auxilio de las personas solidarias que prestaban atención a la caminata.

Pese a la extenuación, el ambiente era festivo. Los marchistas se habían impuesto y le devolvían fortaleza y movimiento a la marcha.

DOMINGO 21 DE AGOSTO

El presidente Evo Morales acusó a los dirigentes de la marcha de sostener contactos con la embajada de Estados Unidos y mostró un extracto de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente por el encargado de Asuntos Indígenas de la embajada, Eliseo Abelo, a los dirigentes Pedro Nuni, Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez, principal dirigente de la CIDOB.



RESPUESTA

Rafael Quispe respondió que recibe llamadas de apoyo de muchas personas e instituciones y no puede hacer nada para evitarlo. "Pinchar [intervenir] los teléfonos viola el derecho a la privacidad que está en la Constitución Política del Estado; esto sólo forma parte de una campaña de desprestigio a los dirigentes".



luces que las habían sacado de su sosiego. Las cornadas dejaron sustos y magullones entre los marchistas.

A José Ortiz, dirigente de los indígenas de La Paz tuvieron que llevarlo de emergencia a San

Borja y luego a La Paz debido a un tobillo fracturado. Más allá de ese incidente, es indudable que de no ser por las marchas nocturnas, los indígenas no habrían salvado los tramos más tórridos indemnes de deshidratación y quemaduras.

Foto: ABI.





Totai'zal



La comunidad fue un punto de descanso y organización

Los marchistas recuperaron fuerzas, planificaron la logística de los días siguientes y protagonizaron un nuevo intento de diálogo que tampoco prosperó.

Los caminantes de la Octava Marcha Indígena llegaron a la comunidad Totaizal en la mañana del 27 de agosto. En el lugar, los habitantes los recibieron cálidamente y les dieron espacio para descansar. Y aunque les aclararon que no tenían muchos recursos materiales para compartir, los invitaron a degustar las jugosas toronjas que pendían de decenas de árboles que adornaban las casas y el canchón de tierra apisonada, en el centro de la comunidad, y que hacía las veces de plaza central.

Los indígenas no escucharon dos veces el convite y saciaron la sed. Después, exprimieron el jugo de las frutas sobrantes y lo almacenaron en botellas de

plástico. “Guardamos un poco para los siguientes días, porque el calor provoca mucha sed y nos falta el agua”, explicó en esa ocasión una marchista beniana. Este comentario resumió, tal vez sin querer, las preocupaciones de los más de 50 encargados de logística, quienes diariamente tenían que garantizar alimentos, agua y medicinas para el millar de movilizados.

La comunidad Totaizal es el hogar de unas 60 de familias campesinas de origen indígena, se encuentra en el municipio de Santa Ana del Yacuma y colinda con la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Movima II.

Al frente de esta comunidad, en el lado norte de la carretera, se halla la Esta-

ción Biológica del Beni, el área protegida que también iba a servir como punto de descanso para los marchistas pero que unánimemente quedó descartado porque optaron por estar juntos en la comunidad.

En Totaizal los marchistas recuperaron fuerzas, planificaron los siguientes días de caminata y protagonizaron un nuevo intento de diálogo que, como ya había ocurrido en otras paradas, tampoco prosperó.

En la labor de estas personas encargadas de la logística —la mayoría mujeres— radicó parte del éxito de la marcha. Las 15 regionales designaron un promedio de cinco delegados, quienes tenían la obligación de comprar alimentos, vituallas, medicinas esenciales.

Estos delegados administraban los recursos que recibían de sus organizaciones y distribuían las donaciones que llegaban a la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) y CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia).

En promedio, la marcha requería diariamente unos mil litros de agua, la carne de una res, un quintal de arroz y cinco litros de aceite, entre otros insumos.

Sobre este tema, la vicepresidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Nazareth Flores, dijo que “no se puede dar mucho a mucha gente”, pero aseguró que en Totaizal la provisión de fideos, arroz y la carne en charque (secada con sal) estaba garantizada.

De todas maneras, mientras la marcha estuvo en territorio beniano, y si los indígenas no disponían de carne de res o pollo para alimentarse aprovechaban los ríos para pescar o se adentraban al monte (bosque) para cazar algunos animales (pequeños cerdos salvajes o aves).

Flores añadió que los responsables de logística adquirirían alimentos en las ciudades cercanas a la marcha: San Igna-



Todos los días, las marchistas lavaban la ropa en los ríos que encontraban en su camino, aseaban a sus hijos y preparaban los alimentos.

cio o San Borja. Las vendedoras de esta última localidad apoyaban a los marchistas y cuando se enteraban de que alguna venta estaba destinada a los indígenas “yapaban” generosamente los pedidos. Empero, también escaseaban los medicamentos y las chinelas, ya que gran parte de los indígenas no tenía recursos para adquirir esos artículos tan esenciales.

El enfermero de la Subcentral TIPNIS, Germán Linares, explicó: “La gente necesita medicamentos para el resfrío”. Un informe del comité de logística, hecho público en Totaizal, puntualizaba que varios marchistas sufrían de calambres, ampollas e infecciones intestinales, porque saciaban la sed con el agua de los ríos que utilizaban para bañarse y lavar su ropa.

De todas maneras, las penurias no eran más fuertes que la voluntad. En esos días, ya sea en conversaciones informales o frente a los micrófonos de los me-



Bajo la sombra de los árboles de toronja los más de mil caminantes saciaron la sed y se recuperaron de una larga caminata nocturna .

dios de comunicación, todos coincidían en que estaban listos para cumplir con el cometido de defender sus derechos territoriales y llegar a La Paz.

“Somos marchistas. Decidimos participar en la marcha porque mi papá nos dijo que íbamos a defender la tierra”, comentaba una muchacha yuqui de 15 años. “Vivimos en el trópico de Cochabamba y los colonos nos quieren quitar nuestros chacos, por eso estamos aquí”, añadió la joven, hermana mayor de cinco niñas.

Consultado sobre las necesidades de la columna, Ernesto Noe, dirigente histórico de la marcha de 1990 por el Territorio y la Dignidad, recordó: “[Antes] no teníamos lo suficiente, no teníamos el apoyo logístico como se ve ahora; más de 15 camionetas están apoyando aquí. En aquel entonces no había ni una camioneta, nuestras maletas las llevábamos al hombro o algunos camiones nos prestaban su apoyo y ahí aprovechábamos. En esa marcha del 90 otros sectores que no eran indígenas nos apoyaron y también la fuerza internacional que le dijo al gobierno: ‘Le vas a dar territorio a los indígenas, ellos piden territorios indígenas no piden una república independiente’, como nos decía el ex presidente Jaime Paz Zamora. Pero al final de cuentas la marcha tuvo éxito porque no sólo tuvimos territorios nosotros, sino también los hermanos tarijeños,

los cruceños, pandinos, paceños, cochabambinos”.

Sin lugar a dudas, las camionetas a las que hizo referencia Noe hicieron la diferencia entre la primera movilización indígena y la actual. Durante las primeras semanas de la marcha de 2011, las 15 camionetas aliviaron la carga de los caminantes, aunque más adelante varias de éstas dejaron el camino, ya sea porque algunas organizaciones mermaron su participación o porque los carros dejaron de funcionar.

Cuando la columna indígena llegó a La Paz, la situación llegó a extremos críticos, porque de las 15 camionetas sólo sobrevivieron siete, y una ambulancia conducida por los guaraníes.

Los carros estaban a cargo de sus conductores, quienes tenían que preocuparse por tener el dinero suficiente para comprar combustible y cumplir tareas de mecánico automotriz.

El médico Álvaro Martínez, que trabajó con la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), además de atender la salud se desempeñó como puntual chofer. “El doctorcito es bien bueno, nos ayuda con todo y siempre se preocupa por tener las cosas listas desde temprano en la mañana y que la camioneta nunca se plante”, comentó Beatriz Pari, indígena Yuqui del Chapare. El galeno sólo respondió con

No llegaron los ministros, pero sí el Defensor del Pueblo

Totaizal finalmente no se convirtió en escenario de diálogo. Los ministros anunciaron que no llegarían a esta comunidad y argumentaron que los indígenas no los esperaron en Santa Ana de Moseruna ni se trasladaron a la Estación Biológica del Beni.

El 30 de agosto, los indígenas recibieron al defensor del Pueblo, Rolando Villena y le solicitaron que hiciera conocer la predisposición que tenían para dialogar. Ese día, el guaraní Celso Padilla, expresó: “Señor Defensor del Pueblo del Estado, los marchistas estamos reclamando al Presidente que cumpla la Constitución que se ha aprobado con el voto del pueblo, nos extraña que la primera autoridad no quiera cumplir la ley suprema”.

“Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero tiene que ser sincero, ¿por qué nos insulta el presidente?”, añadió la presidenta del Comité de Marcha, Yenny Suárez.

Villena respondió que estaba dispuesto a realizar las gestiones necesarias para que las partes se reúnan y lleguen a un entendimiento. “Como Defensor haré todo lo posible para que en el diálogo los marchistas expongan al gobierno su plataforma de demandas y que los ministros escuchen cada una de las peticiones y arriben a un acuerdo favorable”.

La tensión creció en esos días, los colonizadores de Yucumo, población distante a más de 50 kilómetros de San Borja, anunciaron que al día siguiente iniciarían un bloqueo para impedir que la columna llegara a La Paz. Ana Vidal, concejal de Yucumo anunció la decisión, según publicó la agencia gubernamental de noticias ABI. “Nos vamos a concentrar toda la región de la Amazonia para hacer un contundente bloqueo, desde el 31 de agosto a las cero horas, pero desde este momento ya estamos en las carreteras por estrategia”.

La amenaza no surtió efecto y los indígenas de base presionaron a sus dirigentes para continuar la caminata, porque no querían detenerse, ya que sus necesidades aumentaban y sus recursos mermaban día tras día.

Entretanto, el presidente Evo Morales volvía a cuestionar a la marcha: “Algunos dicen no puede entrar camino por el Parque Nacional Isiboro-Sécure; que yo sepa compañeras y compañeros, casi en todo el mundo, caminos y ferrocarriles pasan por parques nacionales, pero bien blindados para que ahí no haya ningún asentamiento”.

El mandatario añadió que algunos indígenas tenían garantizadas millones de hectáreas en las TCO, pero se dedicaban a la venta ilegal de madera e incluso a la fracción y el comercio de sus terrenos pese a que lo prohíbe la Constitución Política del Estado.



Al menos 50 personas, la mayoría mujeres, se encargaron de la logística. Alimentaron y cuidaron a más de mil marchistas por más de sesenta días.

una sonrisa, mientras descargaba los bultos del vehículo.

Solidaridad

Gran parte del éxito logístico de la marcha descansó en el espaldarazo ciudadano. La solidaridad hacia la marcha garantizó a los caminantes no sólo alimentos, también ropa y ciertas comodidades, como carpas o frazadas.

Olga Flores Bedregal, activista de derechos humanos que participó en la Octava Marcha, mientras se encontraba en Totaizal trabajó como una suerte de enlace con los borjanos que querían ayudar. “Voy a San Borja, vuelvo al campamento e intento traer agua y algunos alimentos que donaron en esa ciudad”, explicó.

El 27 de agosto, una comitiva de representantes de las Juventudes de la CI-DOB dio alcance a la columna de la marcha y entregó una donación de vituallas y otros enseres que habían sido recolectados en la plaza 24 de Septiembre, de Santa Cruz de la Sierra.

En San Borja, la solidaridad no cesó hasta que la marcha abandonó el Beni. La población reconoció el esfuerzo indígena. Además, debido a que el territorio indígena del Gran Consejo T’simane colinda con la urbe, los indígenas están muy relacionados con la población movima. Incluso, el alcalde Jorge Añez Claros (MAS) pertenece a ese pueblo.

Las primeras muestras de solidaridad comenzaron el 28 de agosto. Los t’simanes y algunos medios de comunicación realizaron ese día una campaña pública para que los ciudadanos aportaran alimentos y vituallas para los marchistas.

Estos insumos fueron trasladados el 29 de agosto hasta el Totaizal, según el secretario de educación del Gran Consejo T’simane, Cándido Nery Tayo. “Además, 300 de nosotros vamos a sumarnos a la marcha cuando nuestros hermanos pasen por San Borja”, añadió.

Todas las donaciones llegaban a manos del comité de logística de la marcha —confor-



“El trabajo en el chaco es más duro que la caminata”

Entre sus críticas a la marcha, el gobierno objetó la participación de niños menores de 14 años y de mujeres embarazadas. Incluso, en declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Educación Nila Heredia pidió el 6 de septiembre que los dirigentes retiraran a estas personas de la movilización.

Pero las caminantes tenían respuesta a esta crítica. “Estamos acostumbradas, el trabajo en el chaco es más duro que la caminata. Yo trabajo sin problemas, claro que me canso un poco más, pero así nomás es la vida”, respondió sonriente la presidenta de la organización de mujeres del TIPNIS, Julia Molina, quien caminó desde Trinidad hasta la población paceña de Chuspipata,

cerca de 600 kilómetros, con una barriga de casi nueve meses de gestación. Casi una decena de embarazadas compartió esta misma experiencia, aunque cuatro de ellas perdieron a sus hijos en la ruta.

Molina nació en la comunidad Santísima Trinidad, en el sur del TIPNIS. Su pueblo está rodeado de coccaleros, así que tuvo que soportar malos momentos incluso antes del inicio de la marcha. “Los colonos no querían dejarnos salir de la comunidad para evitar que participemos en la marcha. Pero logramos salir y llegamos a Trinidad el 16 de agosto, así que tuvimos que dar alcance a la marcha”, dijo sin asomo de queja esta mujer de menos de 30 años y matrona de

El día a día



mado en su mayoría por mujeres— el cual distribuía equitativamente los insumos entre las encargadas de logística de cada organización regional. Sin embargo, no todas las necesidades de la gente estaban plenamente satisfechas por el elevado número de marchistas. En ese momen-

to, los dirigentes calculaban que más de 1.500 marchistas ocupaban Totaizal.

“Estamos contentos por las cosas que nos llegan. Estamos un poco más tranquilos porque sabemos que no nos faltarán alimentos”, dijo Beatriz Pari.

Mientras los encargados de conducir la columna cumplían sus obligaciones, al resto de caminantes tampoco le faltaba tareas: las señoras lavaban la ropa, aseaban a sus hijos más pequeños, ayudaban a sus esposos a levantar el campamento organizado por “barrios” (que agrupaban a cada organización regional) y preparaban la olla común. La dirigente beniana Nazareth Flores destacó que los varones también se esforzaban: “Acarrean el agua, prenden el fuego, ayudan a cocinar el almuerzo, pescan y cazan animales del bosque o carnean a las reses que algunas comunidades trasladan desde su lugar de origen”.



Cuando el estómago estaba satisfecho algunas personas dormían una siesta, los jóvenes jugaban fútbol y la música típica de las tamboritas llenaba de alegres sonidos el campamento. Al final de cada día, cuando la luz del sol daba paso a los primeros tintes de oscuridad, los marchistas se reunían en asamblea para analizar la jornada y tomar decisiones para el futuro inmediato. Los domingos, los caminantes compartían celebraciones religiosas católicas y no marchaban. En Totaizal la rutina dominical se repitió y un sacerdote ofició una misa.

una prole de siete hijos. “Yo decidí participar en la lucha. Al principio, mi marido no estaba de acuerdo. Le dije: ‘Me voy a la marcha, si tú quieres te quedas’ —sonríe—. Él me siguió y vinimos con mi hija mayor; los más pequeños se quedaron con mi mamá”.

La primogénita de Molina tenía 12 años. De figura delgada y sonrisa a flor de piel, portaba los mismos rasgos de su madre. Aunque un poco tímida para conversar, disfrutaba cuando le tomaban fotografías. Durante la caminata ayudó a su mamá a cuidar de sus hermanos menores, a preparar la comida y a lavar la ropa.

De acuerdo con un recuento de la Defensoría del Pueblo, presentado cuando la columna estaba en Totaizal, cerca de 120 niños menores de 14 años acompañaban a sus progenitores.

Durante la marcha, los menores de dos años viajaron en los brazos de sus mamás, herma-



nas mayores o vecinas. Las mamás y las embarazadas caminaban por la berma. Con chinelas, zapatos o descalzas, intentaban seguir el ritmo de los hombres y las mujeres sin hijos que caminaban a paso más veloz y encabezaban la columna.

Los chicos de más edad intentaban seguir el ritmo de los adultos y si estaban muy cansados, viajaban en las camionetas que trasladaban las vituallas. “Pero la mayoría quería caminar y no quería subir a los carros”, comentó Yolanda Mamani, periodista de radio Deseo y marchista desde el 15 de agosto.





“Mi esposa es mi apoyo más importante”



FERNANDO VARGAS
PRESIDENTE DE LA SUBCENTRAL TIPNIS

Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS, es un hombre menudo que ronda los 50 años, pero conserva el vigor de un joven de 20. Su fortaleza física se hizo evidente luego del 25 de septiembre. Ese domingo, los policías intervinieron la marcha indígena y lo golpearon con palos hasta lastimarle dos costillas. La agresión le dejó fuertes dolores que se agravaban con las exigentes caminatas. Sin embargo, la voluntad y el soporte de su familia, le dieron fuerzas para llegar hasta La Paz. “Mi mujer me ha dicho que tenga valor”, señala casi como un mantra al final de esta conversación, compartida en un galpón acondicionado para los marchistas en la población paceña de Palos Blancos, el 3 de octubre de 2011.

“Soy Fernando Vargas Mosúa, nací el 2 de abril de 1964 en una propiedad que pertenecía a mi padre y se llamaba Paraíso, y que ahora es una comunidad [en el TIPNIS]. Sin embargo, mis papás me sacaron el certificado de nacimiento como si hubiera nacido en Trinidad [ciudad en la que actualmente reside].

Estudié hasta octavo en la comunidad de Gundonovia [en el norte del TIPNIS] y de ahí me fui a Trinidad y continué mis estudios hasta tercer medio. Después, me salí, me fui a trabajar a una estancia y volví a estudiar hasta sacar el bachillerato.

Luego, como siempre me gustó la ganadería —mis padres, que en paz descansan, llegaron a tener más de 600 cabezas gracias a su esfuerzo— me dediqué a ese trabajo.

En 1982 dejé mi hogar. Me fui al cuartel en Santa Cruz, trabajé de obrero y zafrero, y luego volví al Beni en 1988. Mis padres consideraban que estaba muerto y fui como el hijo pródigo de la familia.

Yo volví casado. Mi padre me compró una propiedad en Paraíso, el 89. Ese año apareció otro supuesto dueño que, para mí, era un criminal. Él tenía un título que abarcaba cuatro comunidades y la propiedad que mi padre me había comprado.

Por eso inicié una demanda, y estoy seguro que este señor hizo matar a uno de mis sobrinos. Después de eso mi cuñado y yo le iniciamos la demanda el 19 de enero de 1990. Después de eso mis hermanos me dijeron que dejara esa propiedad, tuve que hacerlo, pero yo no le tenía miedo.

Sin embargo, no quería dejar el proceso y pedí ayuda a la Iglesia Católica. La iglesia me dio empleo como promotor jurídico. Al principio no me pagaban pero aprendí muchas cosas. Por todos estos problemas yo no marché en 1990 [la primera marcha indígena por el Territorio y la Dignidad]. Como promotor jurídico hice trabajos de saneamiento, porque antes se titulaban las propiedades con la figura de proindiviso [propiedad común de varias personas]. Si había 200 familias al final del proceso salían 200 títulos.

También tenía mi ganadito, pero tras una inundación de 1991 perdí todas las cabezas. No sabía qué hacer en ese momento.

Entre 1992 y 1993 inicié mi relación con la dirigencia indígena. En esa época, la CIDOB impulsó el primer censo indígena, que arrancó en el TIPNIS y del cual participé. Me capacitaban rápidamente y durante dos meses trabajamos con cuatro brigadas por todo el territorio.

También participé en otros cursos auspiciados por la CIDOB. El 93 formé parte de un curso para técnicos jurídicos en Trinidad con catedráticos de la Universidad Gabriel René Moreno [de Santa Cruz]. Un encuentro de corregidores del TIPNIS me eligió para participar en esa capacitación durante seis meses: tres meses en el 93 y tres meses el 94.

Después de esa experiencia [como técnico de la organización indígena] fui elegido en 1998 como secretario de Tierra y Territorio en la Subcentral TIPNIS. También tuve otras experiencias de trabajo en la Asamblea del



Pueblo Guaraní y en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el Sernap [Servicio de Áreas Protegidas]

El 2011 asumí la presidencia de la Subcentral TIPNIS. En julio cumplía su gestión la directiva anterior y obligatoriamente tenía que elegir a un nuevo director para que conduzca la organización los siguientes cuatro años. Todos los delegados, me parece, confiaron en mi persona. Horas antes [de la elección] me preguntaron: 'Si nosotros te proponemos como candidato para presidente, no queremos que nos digas no, porque ahorita no hay otra persona en la que podamos confiar'. Yo les dije: 'Pero ¿por qué no lo reeligen al presidente?' Y me dicen: 'No estamos de acuerdo'. Entonces yo les dije: 'Si ustedes consideran, y mañana no me van a dar la espalda, yo acepto. Yo no quiero que cuando la lucha empiece me dejen [Los indígenas ya habían tomado la decisión de realizar la octava marcha]'. Y así se comprometieron a apoyar.

Amor por la familia

Mi familia es fundamental. Sufrí mucho cuando perdí primero a mi padre, el 99, y luego a mi madre el 2002. Pasé por momentos críticos, tuve que enterrar a mi padre cuando estaba en pleno proceso de saneamiento y pericia de campo. En 2002 estaba trabajando en la APG y estando allá en el Chaco murió mi madre. Tuve que venirme de allá, darle la cristiana sepultura y volver al trabajo [dice con voz temblorosa].

Mis padres y hermanos, a pesar de que me fui a vagar —si vale el término— por diez años, me valoran mucho porque cuando volví luché por ellos contra ese sicario. Pero más allá de eso, creo que por encima de los otros está mi mujer, que fue la que siempre me apoyó.

Por ejemplo, cuando hice un diplomado [en Ecuador] lo hice bajo el consentimiento de ella porque no era tan fácil salir de mi país e irme a otro país y dejar a mi familia y a mis hijos. Pero tuve la aceptación de mi mujer y mis hijos.

Eso siempre ha sido así. Al presentarme como candidato antes de ser dirigente, igual yo le consulté a mi mujer, porque si ella me decía 'no te metás', no lo hacía, pero mi mujer me dijo 'depende de vos; el TIPNIS y la Subcentral están un poco desatendidos y creo que hay que hacer algo para reconstruir, y si vos vas a aceptar, vas a tener el apoyo de nosotros' Por eso acepté el cargo.

Mi esposa se llama Rafaela Menacho Monteverde. Ella me sigue apoyando ahora que estoy en la marcha. Por ejemplo, con todo lo que hemos sufrido. [En la intervención policial del 25 de septiembre]. Mi mujer no me ha dicho 'dejá eso, te van a matar, venite acá a Trinidad'. Lo único que me ha dicho es que tenga valor y que no me deje influenciar. Me dijo que jamás me deje comprar, que tengo que pensar en ella, en mis [ocho] hijos y en mi reputación, y que eso hace grandes a mis hijos. Eso me da mucho valor y por eso me siento tranquilo. No me interesa lo que a veces mis propias bases dicen que los dirigentes reciben paga. No me interesa porque no es mi propósito. Mi propósito es que el TIPNIS sea respetado, que los que confiaron en mí se sientan tranquilos y que sigan viviendo en el territorio. Luego [de la marcha] volveré para definir nuevas estrategias de cómo encarar la autonomía indígena en el TIPNIS, tomando en cuenta que hay que definir una política de gobierno indígena y de desarrollo en el marco de la protección del parque, y entonces se tiene que hacer un trabajo muy responsable para que la forma de economía y de desarrollo no afecten al área de conservación".



San Borja



El último bastión de los indígenas

En la capital movima los caminantes recibieron solidaridad, muestras de cariño y un espaldarazo que fortaleció al movimiento hasta que éste dejó el territorio beniano.

Los indígenas llegaron a San Borja el día 18 de la caminata y fueron recibidos con mucho afecto por la ciudadanía que salió a las calles ese 1 de septiembre. Así iniciaron una prolongada estadía en el lugar que, según varios marchistas, fue donde mejor se los acogió y apoyó, el lugar donde cifraron sus esperanzas de iniciar un verdadero diálogo con el gobierno y, eventualmente, resolver las 16 demandas que los habían llevado a la carretera.

San Borja, que cuenta con alrededor de 80 mil habitantes y pertenece a la provincia beniana José Ballivián, se convirtió en una suerte de bastión para la marcha, debido también a que la siguiente población de importancia era Yucumo,

la trinchera de los colonizadores que se oponían férreamente al movimiento indígena y por tanto tierra hostil para los caminantes.

Los marchistas tenían que llegar a San Borja un día antes pero una torrencial lluvia se los impidió y los obligó a parar en una propiedad privada. El aguacero tuvo la virtud de limpiar el ambiente del denso humo que manaba de los chequeos de esa región.

Mientras la movilización se acercaba a la ciudad. Los borjanos se debatían entre dos posiciones; una parte se mostraba afín al movimiento indígena y, la otra, lo cuestionaba; entre quienes se oponían estaban los gremialistas, colonizadores, movimiento sin tierra y autoridades mu-

nicipales. Estos sectores habían previsto bloquear el ingreso a su pueblo para impedir que la marcha pasara por San Borja.

Sin embargo, esos planes no se hicieron realidad porque esas entidades tenían divergencias internas que no lograron superar, según recordó el representante de la Defensoría del Pueblo en el Beni, Luis Revollo.

Por ello, la población afín al movimiento y los indígenas del Gran Consejo T'simane, ubicado en las cercanías de San Borja, dieron un "acogedora bienvenida" a los más de mil caminantes que llegaron al promediar las nueve de la mañana del 1 de septiembre, recordó Revollo.

Debido a esta espontánea recepción quedó en el olvido la decisión del alcalde borjano Jorge Añez (MAS), quien anunció que no organizaría ningún recibimiento oficial para la Octava Marcha Indígena.

Los aplausos y vítores que dieron los borjanos animaron a los indígenas. La columna dio una vuelta por la plaza principal 10 de Octubre y luego se dirigió a los campamentos acondicionados para su estadía; en el politécnico de la Universidad Autónoma del Beni y en el centro católico Emaus; semanas después, los marchistas que lograron evadir la represión policial del 25 de septiembre descansaron en este último predio.



Como ocurría en todas las paradas, los indígenas jugaron fútbol en San Borja. En esa ciudad, el onceno se enfrentó con un equipo del Gobierno Municipal.

Estos espacios no brindaban muchas comodidades, especialmente el predio universitario. El politécnico dista unos 20 metros de la carretera interdepartamental y el polvo que levantaban los vehículos cuando pasaban por esa ruta caía sobre las carpas, la ropa y los alimentos de los marchistas. Además, no había suficiente agua. Sin la solidaridad permanente de la



Las sillas vacías de la fotografía de la izquierda evidencian la ausencia de las autoridades nacionales. Tampoco hubo diálogo en San Borja.





Los indígenas armaron su campamento en las instalaciones del Politécnico de la Universidad Autónoma del Beni.

Una empresa embotelladora de agua donó el líquido elemento, los ganaderos aportaron carne fresca y la ciudadanía ropa y otros alimentos para sus eventuales huéspedes.

población, la prolongada estadía en San Borja habría sido aún más penosa.

Antes de la llegada de los indígenas, y durante su permanencia, varias organizaciones borjanas, como el Comité Cívico, las Damas Borjanas y la ciudadanía en general hicieron campañas de recolección de víveres y agua para la columna. Una empresa embotelladora de San Borja surtió de agua a los marchistas por alrededor de dos semanas. Los estancieros aportaron cabezas de ganado para su alimentación.

El 4 de septiembre, el Gobierno Municipal decidió romper el hielo y organizó un juego de fútbol con el onceno indígena. La Alcaldía, liderada por el t'simane Jorge Añez (MAS), regaló poleras y pantalones cortos a los jugadores. El miércoles 7 debía realizarse otro encuentro con la selección de San Borja, en el césped natural del estadio Bernardino Moreno, pero los locales no acudieron a la cita deportiva.

Sin embargo, no todo fue paz y alegría. A los tres días de la llegada a San Borja, una aguda diarrea provocó la muerte de José Uche, de ocho meses de edad; dos días después falleció un dirigente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH), Eddy Martínez, quien perdió la vida cuando el avión en el que se trasladaba de Santa Cruz a Trinidad se estrelló en un monte tupido, cerca de esta última ciudad. Del siniestro sólo salvó la vida Minor Vidal, un empresario del área farmacéutica cuyo rescate transmitido por televisión lo convirtió en una celebridad mundial.

El niño fue enterrado en el cementerio de San Borja y a Martínez lo llevaron de Trinidad a su pueblo natal en Santa Cruz. Tras las muertes, un sentimiento de congoja y bronca se apoderó de los marchistas y se orientó hacia la sede de gobierno. En el cortejo fúnebre del pequeño los dolientes llevaban un letrero: "Inocente víctima de este gobierno insensible e in-

El apoyo de San Borja despertó la sensibilidad de los marchistas, quienes denominaron a los borjanos como "personas de oro".



La abanderada de la Octava Marcha Indígena, Aidés Ortiz, dedicó una canción a la capital movima el 7 de septiembre, cuando la columna dejaba esta ciudad.

capaz de solucionar los problemas de los pueblos indígenas”

El cartel reflejaba la impotencia de la gente ante los calculados movimientos gubernamentales. El mismo día de la desaparición de Eddy Martínez, el mi-

nistro de la Presidencia, Carlos Romero, mediante una carta, cerraba la posibilidad de negociación con los indígenas. Los marchistas habían pedido dialogar con el Presidente Morales, porque consideraban que los ministros no tenían poder de decisión.



Foto: ABI.

Con Llorenti en San Borja, la intervención se veía cercana

El 31 de agosto, un día antes del arribo de los marchistas a San Borja, llegaron a esa ciudad los ministros de Autonomías, Claudia Peña, de la Presidencia, Carlos Romero, y de Gobierno, Sacha Llorenti. La presencia de este ministro llamó la atención del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien comentó, cuando concluyó la marcha, que el arribo de este Ministro demostró que había “un plan para intervenir la marcha”.

Los dirigentes indígenas no recibieron contentos la llegada de esa comitiva. Argumentaron que el ministro Romero no era un interlocutor válido y que el Ejecutivo nuevamente había optado por no enviar 10 ministros al Beni.

En respuesta, los ministros convocaron a una conferencia de prensa en la Alcaldía de San Borja y acusaron a los indígenas de intentar desestabilizar al gobierno. Horas después, en

La respuesta del gobierno destacaba: "Se les comunica (...) que la Comisión de Ministros goza de amplios poderes de decisión. Por tanto no es necesario la presencia del Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en la VIII marcha".

La misiva también hizo referencia a la proyectada carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos y propuso "iniciar el proceso de consulta [sobre el futuro de esa obra] con los actores involucrados".

El representante de la Defensoría del Pueblo, Revollo, recordó que todos esos acontecimientos entristecieron a la marcha: "Primero, por el diálogo fracasado; segundo, por la pérdida del niño Uche; tercero, muchas enfermedades; y cuarto, la muerte de Eddy Martínez. Entonces había que salir de San Borja como sea. Y salieron con rumbo a La Embocada".

Antes de partir, los indígenas agradecieron públicamente la hospitalidad y solidaridad de los borjanos. La mañana del miércoles 7 de septiembre la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), presidentes de

las organizaciones regionales e indígenas de base participaron en la plaza 10 de Octubre de San Borja de un sencillo acto de despedida.

El comité cívico y decenas de ciudadanos participaron en esa despedida. "Agradecemos las muestras de solidaridad con los pueblos indígenas y pedimos a Dios que les devuelva toda la ayuda material y moral que nos demostraron estos días", destacó la vicepresidenta de la CIDOB, Nelly Romero.

"Todo lo que ustedes pusieron a favor de esta marcha, el Dios de todos, les va

devolver el doble. Estamos muy agradecidos por todo su aporte, por todo su apoyo moral y material", afirmó el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla.

El marchista y escritor canichana Antonio Soto compuso una canción para San Borja y la abanderada de la marcha, Aides Oriz, interpretó un tema musical a capela.

La solidaridad moral de San Borja fue decisiva para mantener las fuerzas de los indígenas. Este apoyo creció aún más después de la intervención a la marcha.

la tarde, las autoridades estatales abandonaron la ciudad.

Tras conocer estas declaraciones, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, respondió: "(Los ministros) siguen ultrajando a los pueblos indígenas, nosotros no queremos entrar en ese juego de soberbia".

La llegada de Llorenti coincidió con el comienzo del bloqueo de unos 200 colonizadores en el puente San Lorenzo de Chaparina. Este sector pedía a la marcha que eliminara cinco demandas de su plataforma, a saber: Fondo Indígena, Fondo Verde, tierras fiscales, caminos e hidrocarburos.





“Quiero dejar a mis hijas un territorio para evitar que mendiguen”



YENNY SUÁREZ

PRESIDENTA DEL COMITÉ POLÍTICO DE LA MARCHA

La dirigente Yenny Suárez Parada terminó de repartir un lote de chinelas a varios de los indígenas en el campamento de San Borja al final de la tarde del 7 de septiembre de 2011. Con la ayuda de otras mujeres registró en un cuaderno el nombre y apellido de quienes recibieron esos calzados. Con esta distribución terminaba una de las actividades que le tocó cumplir ese día.

Después de atender esta tarea, a la dirigente le esperaba una reunión con los dirigentes de las organizaciones indígenas para evaluar cómo había transcurrido esa jornada.

En un breve descanso de sus ajetreos cotidianos conversó con la Fundación TIERRA y comentó cómo llegó a la comandancia de la marcha. En agosto de 2010 la comunidad yuracaré del TIPNIS, San Pablo, la designó como vicepresidenta de la organización de mujeres de esa región. En este puesto se ganó la confianza de sus congéneres y, cuando los indígenas tomaron la decisión de marchar para defender sus territorios, impulsaron su designación como presidenta del Comité. Desde este puesto debía paliar las necesidades de sus compañeros de lucha, como la alimentación, entrega de medicamentos y distribución equitativa de las donaciones que llegaban a la columna.

Para llegar a ese sitio venció el machismo de los dirigentes. “Es bien difícil como mujeres porque tenemos [que enfrentar la] discriminación de los varones. Pero tanto los hombres como las mujeres tenemos que ejercer nuestros derechos”.

Suárez explicó que con su participación en la movilización de 2011, quería garantizar la seguridad de su familia. “Quiero dejar a mis hijas un territorio para evitar que mendiguen”. Aunque esta convicción la alejó de sus seres queridos. Su esposo no marchó porque debía trabajar y sus dos hijas, de diez y doce años, tenían que asistir a la escuela. “Estoy sola en la marcha”.

EL DESAFÍO MAYOR

Como le ocurrió a todos los marchistas, soportó la violenta intervención policial en San Lorenzo de Chaparina. Ese 25 de septiembre, minutos antes de la represión, Suárez recibía una unidad de suero para mejorar su estado de salud, afectado por el esfuerzo de la caminata. Eso la libró de sufrir mayores daños. La indígena retornó a San Borja con un grupo de marchistas que escaparon de la represión.

En la intervención Suárez perdió todo lo que tenía. “Algunos estamos solo con la ropa del cuerpo, no tenemos ni cama donde dormir, como muchos hermanos y mujeres”, comentó en el campamento Emaus, en San Borja, predio en el que encontraron refugio los indígenas.

En ese improvisado campamento, la representante compartió su decepción. “Pensábamos que con este gobierno indígena todo iba a cambiar, así como él [Evo Morales] dice que gobierna obedeciendo al pueblo; sin embargo, nosotros vemos que es todo lo contrario, creo que es nomás un Presidente de los cocaleros”.

Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para lamentarse por el susto vivido. En San Borja se ocupó de los menesteres necesarios para cubrir las necesidades de sus compañeros y organizar el reinicio de la movilización.



El 29 de septiembre, un día antes de la partida de San Borja, debía conseguir los medios para trasladar a los indígenas hasta Quiquibey, donde se reiniciaría la marcha hacia La Paz. Se comunicó rápidamente con personas particulares y organizaciones de esa ciudad que ya la habían colaborado en otras ocasiones y consiguió el dinero para alquilar camiones que transportaran a los indígenas hasta esa población.

Su labor operativa continuó el resto de la marcha. Por ejemplo, antes de que la columna llegara a Caranavi trabajó con las organizaciones que prepararon la bienvenida a los indígenas. Más cerca de la sede de gobierno, cuando la altura y el frío afectaban a los caminantes, contó con el apoyo de instituciones solidarias como la Universidad Mayor de San Andrés, y consiguió alimentos y ropa abrigada.

Sus obligaciones continuaron incluso cuando la marcha ya había terminado. El 26 de octubre, consiguió dinero para pagar los viajes de los marchistas que, desde esa capital, tenían que regresar a sus comunidades de origen.



La Embocada





La marcha se debatió entre la implosión y la explosión

La lentitud en la caminata y los frustrados intentos de diálogo comenzaron a mermar la fortaleza de los indígenas. Algunos dejaron la movilización.

En esta localidad la marcha casi terminó partida en dos bloques.

A mediados de septiembre, a casi un mes del inicio de la Octava Marcha Indígena, las presiones en contra de la movilización socavaban la fortaleza de los caminantes. Además, las disputas internas eran evidentes y aumentaban las tensiones en el grupo humano que compartió techo y comida durante la movilización.

Tras cumplir con el velorio simbólico del líder chiquitano, Eddy Martínez, quien falleció en un accidente aéreo, la marcha recorrió 24 kilómetros hacia el oeste desde la comunidad de Horeb y llegó a la comunidad campesina La Embocada, a sólo 22 kilómetros del bloqueo colonizador sobre el puente San Lorenzo de Yucumo.

La marcha estuvo detenida en La Embocada hasta el 15 de septiembre. Este poblado se convirtió en el escenario en el que las tensiones estuvieron a punto de tirar por la borda el objetivo pacifista de la movilización indígena.

CUESTIONAMIENTOS

El bloqueo de colonizadores y campesinos en las cercanías de Yucumo había comenzado el 30 de agosto y, a mediados de septiembre, sumaba más de 200 bloqueadores. Los interculturales cerraban la vía de manera intermitente, y una zanja en las cercanías del puente San Lorenzo interrumpió la circulación vehicular.

En dos ocasiones, los bloqueadores impidieron el paso a dos camionetas que

llevaban alimentos para los indígenas. Un vehículo pertenecía al pueblo Guaraní y el otro a la organización no gubernamental Fobomade. Este último coche casi fue incendiado por los colonos, quienes llevaron al vehículo a un estacionamiento y se negaron a entregarlo a sus dueños.

Por si fuera poco, el número de efectivos policiales destacados a este sector del Beni iba en aumento, al menos 400 en ese momento. Los agentes tenían la misión de detener a la marcha indígena. “No estamos viniendo a reprimir esta marcha. Estamos prestos a dialogar con ellos [los indígenas] y decirles señores no avancen porque no les vamos a permitir avanzar, porque no queremos enfrentamientos [con los colonos]”, declaró Carlos Flores comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales [UTOP].

Los indígenas estaban molestos ante esta acción, porque los policías tuvieron una actitud distinta con otros bloqueos. Indígenas pandinos y cruceños cerraron las carreteras cercanas a sus territorios, como medida de protesta en contra de la campaña de desprestigio del gobierno, y fueron reprimidos con gases lacrimógenos. “Yo fui a organizar el bloqueo en El Naranjal (Pando) el 25 de septiembre. Los policías nos golpearon y se burlaron de nosotros. Un compañero tenía el rostro bañado en sangre por los golpes que recibió y los policías le preguntaban riendo ‘¿cuándo te hiciste eso?’, pese a que ellos lo habían golpeado”, recordó el takana pandino Lorenzo Tórrez.



Molesto por esta situación, el dirigente guaraní Celso Padilla aseguró que los indígenas no se detendrían frente al corte de vías y que el gobierno sería culpable si seguía impulsando la confrontación entre colonizadores y campesinos e indígenas.

Las maniobras en contra continuaban en la plaza Murillo. El oficialismo anunció una investigación de las ONG que

Foto: AINI-Noticias.



El gobierno le puso el calificativo de vigilia al bloqueo protagonizado por campesinos e interculturales sobre el puente San Lorenzo, a 200 metros de Yucumo, enclave colonizador.



Foto: ABI.



Foto: CIDOB.

Los rumores de una posible intervención policial comenzaron a circular a inicios de septiembre. En el campamento indígena aumentaba la incertidumbre por una amenaza que, finalmente, se hizo realidad el 25 de septiembre.

colaboraban con los indígenas y aseguró que el bloqueo en Yucumo no era tal. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y el canciller David Choquehuanca, declararon por separado, que los colonizadores no cortaban la ruta caminera, sino que —en palabras de este último— hacían una “vigilia para garantizar la tranquilidad en la zona”.

El ministro Romero intentó sacar al gobierno de la ecuación del conflicto y aseguró que los indígenas no tenían ninguna agenda de discusiones con las autoridades, sino que debían dialogar con los colonizadores para solucionar sus desavenencias.

En respuesta, el líder de la CIDOB Adolfo Chávez señaló: “No tenemos ningún problema con los colonizadores, si ellos tienen alguna necesidad deben pedirle al gobierno que atienda sus requerimientos”.

Sumados a estos factores, los rumores de una posible intervención —que se haría realidad 15 días después de la declaración de Chávez— aumentaba los temores en el campamento. La guardia indígena redobló sus esfuerzos y pasó varias noches en vela custodiando el sueño de sus congéneres.

RUMORES

Todas estas acciones hicieron mella en la marcha. El número de indígenas que participaba en la manifestación era evidentemente menor que el que salió de San Borja. De acuerdo con un informe de necesidades elaborado por la comisión de logística de la marcha, el grupo había bajado de más de 1.500 a un poco más de 950.

Las prolongadas paradas también afectaban a los indígenas. Entre el 15 de agosto y el 10 de septiembre, se habían movilizó sólo 11 días. Al contrario, quienes

Los marchistas creían que iban a dialogar de “indígena a indígena” con el Canciller David Choquehuanca, pero éste dio menos espacio al debate que las autoridades que dieron alcance a la movilización días atrás.

fueron parte de otras marchas, en especial la primera de 1990, recordaban que llegaron a La Paz en 35 días.

“No nos imaginamos que íbamos a seguir marchando, pensamos que se iba a solucionar el problema, pero no había sido así. Lo que más queremos es que nos escuchen para que no haya enfrentamientos”, comentó la marchista de base Dina Avayo, guaraní de la comunidad Eiti, en el Chaco cruceño.

En la dirigencia, el descontento también hacía mella. Mientras algunos marchistas de Santa Cruz insistían en esperar una respuesta del gobierno y no querían avanzar hacia Yucumo —donde el peligro aguardaba—, los otros querían movilizarse porque consideraban que sus demandas no iban a ser solucionadas en el camino. “Tenemos que llegar a La Paz para que el gobierno nos garantice la solución a nuestras peticiones”, aseguró una marchista del Beni.

TRANQUILIDAD MOMENTÁNEA

Un nuevo intento de diálogo serenó momentáneamente los ánimos. No obstante, ese encuentro, esta vez con el canciller David Choquehuanca, estaba muerto antes de nacer. La autoridad llegó a La Embocada el 14 de septiembre y lo primero que dijo fue que no podía cambiar la decisión del presidente Evo Morales sobre la construcción de la carretera a través del Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Esa reunión amargó a los marchistas. “Estamos tristes porque el gobierno no nos quiere escuchar. Le pedimos que nos atienda”, dijo Cecilio Moyno, de la comunidad Santiago, en el TIPNIS.

Al día siguiente del fallido diálogo, el 15 de septiembre, las discusiones internas sobre si la marcha debía continuar o si debía esperar al gobierno acrecentaron las contradicciones entre los indígenas. Benianos, paceños y otros grupos partie-



Foto: Prensa Indígena.

Choquehuanca: “No podemos cambiar lo que el Presidente ya ha decidido”

El canciller David Choquehuanca llegó a La Embocada para dialogar “de indígena a indígena” con los marchistas. Sin embargo, su primera frase borró las expectativas del rostro de los caminantes. “No podemos cambiar lo que el presidente [Evo Morales] ya ha decidido”. El Ministro añadió que no se podía dejar sin efecto las obras de construcción de los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuya ejecución había arrancado el 3 de junio de 2011.

El encuentro entre los marchistas y los ministros Carlos Romero y Wálter Delgadillo se realizó en medio de la tensión generada por los colonizadores, quienes bloqueaban el ingreso carretero a Yucumo con el propósito de obligar a los caminantes a dialogar con el gobierno.

Ante la declaración de Choquehuanca, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, criticó la actitud del gobierno por su insistencia en que el tramo II de la carretera debía atravesar el corazón del Isiboro-Sécure.

“EL TIPNIS no quiere carretera dentro del TIPNIS, porque va a destruir nuestra relación con la naturaleza que es íntima, pero eso no quiere decir que se oponga a una vinculación entre Cochabamba y Beni, queremos la vinculación pero que no parta nuestro territorio”, destacó Vargas. Choquehuanca ignoró el cuestionamiento y cambió de tema.

El Canciller aseguró que el Presidente tenía el propósito de impulsar el proceso de consulta entre los indígenas y un referéndum en Beni y Cochabamba para superar la controversia por la carretera. El go-



Los bloqueadores de Yucumo asumieron otra medida y el 17 de septiembre anunciaron que irían al encuentro de la marcha para impedir que ésta siguiera avanzando.

ron hacia el siguiente punto de parada: la hacienda Limoncito, a sólo 17 kilómetros de Yucumo.

Aún así, el 16 de septiembre, todos los dirigentes de la Octava Marcha se reunieron en La Embocada. Los representantes que pasaron la noche en Limoncito regresaron sobre sus pasos para participar en una asamblea con los dirigentes

chiquitanos y guaraníes. Esta situación se prolongó por varios días.

El grupo guaraní tuvo problemas internos que casi provocaron su deserción y los chiquitanos permanecieron en Limoncito hasta el 23 de septiembre, aunque éstos aseguraron que no tenían desavenencias con el resto de los marchistas.



Foto: CIDOB.

El cuarto intermedio concluyó después de las tres de la tarde. La mesa de diálogo fue reinstalada y el debate ya no se centró en el TIPNIS, sino en el segundo punto de la plataforma de demandas de la marcha indígena: la exigencia de paralización de actividades hidrocarburíferas en el parque nacional Aguaragüe, en el Chaco boliviano.

El diálogo se prolongó hasta el final de la tarde. Indígenas y autoridades debatieron sobre el contenido de la plataforma de 16 demandas y acordaron encontrarse al día siguiente en ese mismo lugar.

En la mañana del 16 de septiembre, el Canciller volvió al campamento y entregó una carta que el Presidente había enviado a los marchistas. En la comunicación el gobierno reiteraba su intención de realizar la consulta a los indígenas de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y sugería que los indígenas retomarían las seis mesas de diálogo establecidas en Puerto San Borja. El representante gubernamental no estuvo más de cinco minutos en el lugar.

bierno había anunciado esta determinación días antes de que la marcha arribara a La Embocada. Oportunamente, los indígenas rechazaron aquella determinación con el argumento de que la consulta tenía que realizarse antes del inicio del proyecto y sólo entre los habitantes del territorio.

Los comentarios del dignatario estatal molestaron a los caminantes. El ex presidente de la

Subcentral TIPNIS, Adolfo Moya, y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, consideraron que esta actitud prácticamente anulaba el intento de diálogo.

La discusión no llegó a mayores y para calmar los ánimos los indígenas y las autoridades optaron por un cuarto intermedio para almorzar. El reloj daba la 13.15.



“El trauma para los niños es duro; las heridas curan, pero quedan las cicatrices”



RAFAEL QUISPE
Ex MALLKU DEL CONAMAQ

La intervención policial a la marcha indígena puso a prueba las convicciones y entereza del mallku del CONAMAQ, Rafael Quispe; el líder aymara nacido en la provincia Pacajes de La Paz y que se convirtió en el símbolo de la unificación de los indígenas de tierras altas y bajas, protagonistas de la Octava Marcha Indígena.

En esa aciaga jornada, los policías golpearon a su hija de 12 años provocándole una herida en la mejilla izquierda. “Sentí un dolor muy fuerte y no creo que los policías hayan estado sanos, porque masacraron a niños y mujeres embarazadas. Las madres pedían a gritos estar con sus hijos y les tapaban la boca. Eso sólo lo hacen las personas que están mal de la mente. El trauma para los niños es duro; las heridas sanan, pero quedan las cicatrices”, recordó.

Casi dos semanas después de la agresión policial, lejos de la angustia padecida y con el ánimo alegre por la recepción que tuvo la marcha en Caranavi, Quispe compartió sus impresiones mientras descansaba en la cancha de fútbol de esa localidad.

“Esta experiencia ha fortalecido a mi familia —su esposa y otro hijo menor de diez años—. Lo que han entendido mis hijos es que sea quien sea el presidente viviremos en un sistema autoritario mientras

el gobierno sea capitalista y neoliberal. Eso no va a cambiar mientras no haya un cambio radical”.

Cuando la avalancha del 25 de septiembre estuvo a punto de enterrar a la movilización indígena; el dirigente aymara abandonó el campamento sin tener tiempo de buscar a su familia.

“No tuve tiempo para ingresar al campamento, yo estaba sobre la carretera y una camioneta de la marcha me sacó de ahí. Pero yo sabía que el gobierno quería descabezar la marcha. Cinco líderes estábamos en la mira [Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Celso Padilla, Pedro Nuni, además de Quispe]. Por eso me fui, no por cobarde, sino porque era una guerra y yo era más útil libre, porque el gobierno quería encarcelarnos a todos”.

No obstante, la situación fue otra: los policías retuvieron a decenas de marchistas, separaron a las familias y los llevaron a Rurrenabaque, quienes escaparon de las manos uniformadas encontraron refugio en San Borja o en estancias cercanas al campamento avasallado.

En esa confusión Quispe perdió contacto con los suyos. Él halló protección en la iglesia de San Borja pero no supo nada de su esposa e hijos, quienes no respondían a sus llamadas telefónicas. Debido a esa tensión, el mallku redujo al máximo el contacto con los medios de comunicación.

Tras esos momentos de incertidumbre, la familia logró reunirse días después y continuó con la medida de protesta hasta llegar a La Paz. “Han sido momentos duros, mis hijos están mejor”.

Debido a toda esa experiencia le preguntamos si se arrepentía de que su familia haya participado en la marcha. “Vine a la marcha con mi familia porque nosotros somos líderes de acuerdo con nuestras costumbres propias, no somos elegidos por votación. Tenemos una representación dual, chacha-warmi (esposo y esposa)”, respondió.



“El gobierno demostró que nunca defendió nuestros derechos”



ADOLFO MOYE

EX PRESIDENTE DE LA SUBCENTRAL TIPNIS

Adolfo Moye concluyó su gestión como presidente de la Subcentral TIPNIS en julio de 2011, pocas semanas antes del inicio de la Octava Marcha Indígena. Sin embargo, como dirigente fue uno de los impulsores de la movilización que partió de Trinidad el 15 de agosto del año pasado.

“Desde 2007 hemos pedido al gobierno que no construya el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio por el corazón del TIPNIS. Hemos presentado quejas, pruebas para enjuiciar a los avasalladores e incluso tuvimos que quemar algunas plantaciones de coca y construcciones que los cocaleros construyeron en el territorio”, respondió cuando le consultamos cómo trabajó por su territorio mientras fue dirigente.

Cuando Moye era presidente de la Subcentral solicitó a la CIDOB su auxilio. En abril de 2011 pidió a los dirigentes nacionales que se comprometieran a defender éste y todos los territorios indígenas del país. “[Habíamos detectado] hasta 300 avasallamientos de cocaleros que sembraron coca dentro del TIPNIS. Hemos visto una deforestación

dramática, no se han considerado ni siquiera las maderas útiles para las comunidades, como la jatata [palmera que sirve para construir techos], que ha sido arrasada. Cuando la dirigencia conoció esta realidad decidió apoyar la realización de la Octava Marcha”.

Moye concluyó su gestión cuando el inicio de la marcha estaba a la vuelta de la esquina. No obstante, esa nueva circunstancia no alteró su decisión de defender su “casa grande”.

Disciplinadamente participó en la caminata y ocupó un espacio en las filas de los representantes de las comunidades del área y llegó hasta La Paz conservando el perfil bajo que las circunstancias le demandaban. El 19 de octubre, cuando la columna arribó a la sede de gobierno participó de la misa pública en la plaza San Francisco, confundido en ese mar de gente que conmovió al país entero, lejos de las cámaras y de las declaraciones públicas.

Moye tenía claro que, sin importar el lugar que ocupara en la columna, debía engrosar la movilización que ayudó a construir. “Esta marcha es justamente resultado de esa ‘no obediencia’ del gobierno ante nuestras demandas por la defensa del territorio y de nuestros derechos. El gobierno demostró que nunca defendió nuestros derechos territoriales. Todo lo que dijo fue para ganar nuestro apoyo en todos los procesos electorarios desde el 2005 y aún así nunca hemos tenido apoyo de nuestro gobierno”.

Adolfo Moye es mojeño y nació en Santísima Trinidad, una comunidad ubicada en el sur del TIPNIS. Su pueblo natal está rodeado de cocaleros que disputan el derecho a ocupar este sitio. Debido a su ubicación geográfica, este lugar es considerado por los indígenas como un bastión en la defensa del territorio indígena. Está casado y tiene un hijo pequeño.

Villa Yenny

VILLA YENNY





Sólo quedó la mitad de indígenas

El bloqueo de los colonizadores, la muralla de policías y la falta de agua redujeron aún más el número de caminantes. La marcha parecía agonizar a mediados de septiembre de 2011.

A las nueve de la mañana del martes 20 de septiembre, 300 colonos iniciaron una marcha desde Yucumo, con el objetivo de dar alcance a la Octava Marcha que estaba a unos siete kilómetros de esa localidad. Era una más de las acciones de los colonizadores que se oponían a la movilización indígena.

Tres horas más tarde, en sentido contrario a los colonos y bajo el intenso calor del mediodía, partió desde Limoncito rumbo a Yucumo un debilitado contingente de indígenas, es decir, sin los chiquitanos ni los guaraníes, porque ellos permanecían en La Embocada, la parada previa a Limoncito. Como siempre, la tamborita acompañaba los pasos

indígenas pero la marcha languidecía, sólo marchaban alrededor de 800 indígenas, de los más de mil que partieron de San Borja.

Después de algo más de hora y media de caminata, los indígenas se encontraron con la barricada policial que impedía el tránsito por la carretera, frente a la hacienda de Villa Yenny, a unos siete kilómetros de Yucumo. Los caminantes pidieron a los uniformados que los dejaran pasar para continuar su marcha, los policías negaron esa posibilidad con el argumento de que iban a impedir cualquier enfrentamiento con los colonos. La manifestación de ese sector también estaba detenida a unos 700 metros de distancia del contingente policial.

Los uniformados se apoyaban en una carta del Defensor del Pueblo, Rolando Villena quien había pedido al Comando General de la Policía que evitara enfrentamientos, garantizara los derechos de la marcha indígena y precautelara la vida de la población. El representante defensorial de Santa Cruz, Hernán Cabrera, tras escuchar ese argumento aclaró que aquella misiva estaba fechada 15 días atrás, “cuando la situación de la marcha era distinta”, indicó a los uniformados.

Mermados en cantidad y en fuerza, los indígenas desistieron de continuar marchando y optaron por acampar en ese lugar. Pese a la tupida vegetación a ambos lados de la vía, se trataba de un lugar inhóspito para los marchistas y carecía de las mínimas condiciones para el aprovisionamiento de los caminantes. Sólo había una casa de madera que servía de cobijo a los trabajadores de la hacienda Villa Yenny.

Sin embargo, la incomidad no amedrentó a los indígenas. Ellos insistieron que no se enfrentarían con nadie, porque su movilización era pacífica. Así, montaron improvisados toldos al borde de la carretera e instalaron carpas individuales en Villa Yenny.

Inmediatamente los marchistas, especialmente mujeres y niños, reclamaron a los uniformados porque no tenían acceso al agua. “¡Queremos agua!, ¡Queremos agua!, ¡Queremos agua!” coreaban. Pero la policía no permitió acceso al arroyo Chaparina, situado metros detrás de la barrera de los uniformados.



En la noche llegaban al campamento los víveres acopiados por la ciudadanía de San Borja. Todos los días se realizaba una campaña de apoyo efectivo a los marchistas que se encontraba aproximadamente a 40 kilómetros de distancia.

A las dos de la tarde llegó al lugar el fiscal de San Borja, Juan Ernesto Muñoz, y dijo que estaba ahí para garantizar los derechos de las personas. Los indígenas denunciaron ante esa autoridad que mientras iban por el camino, escucharon al menos diez detonaciones de cachorros de dinamita. La autoridad respondió que esperaría un informe para confirmar si los colonos tenían explosivos.

Al respecto, el representante defensorial del Beni, Luis Revollo, recordó que

ese y los siguientes días hubo “intentos de confrontación” de los colonos hacia los indígenas. “Empezaron a detonar cachorros de dinamita (...) para amedrentar a los indígenas”.

Media hora más tarde de que los policías impidieran a los caminantes alcan-



En Villa Yenny, la carencia de agua potable derivó en un incremento de los casos de diarrea.





Protegidos por la guardia indígena, la columna avanza desde Villa Yenny hasta Chaparina. Los marchistas sentían que era inminente una intervención policial.

“En Villa Yenny se vive un virtual Estado de Sitio”, reclamó el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, porque más de 200 policías impidieron la caminata por la carretera beniana.

zar el arroyo, la tensión quedó momentáneamente en segundo plano, porque llegó una dotación del líquido desde Limoncito. Pero ese regocijo fue empañado por el estruendo de una explosión en el monte, a un costado de los marchistas. Tras escuchar ese sonido, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, recordó a los periodistas que la marcha era pacífica e insistió en que los indígenas no tenían nada que conversar con los colonos, sino con el gobierno.

Una hora después, a las tres de la tarde aproximadamente, los marchistas del CONAMAQ decidieron hacer una ofrenda a la Pachamama frente a la formación policial. Tendieron un aguayo sobre la vía y esparcieron hojas de coca.

Alrededor de las cinco de la tarde, los indígenas iniciaron una reunión dirigida por la CIDOB para analizar una carta enviada por el gobierno, y decidir qué actitudes asumirían frente a los percances que enfrentaban esos días.

En esa reunión participaron representantes de organizaciones indígenas internacionales. Miguel Palacín, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), y Edwin Vásques, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Estos dirigentes recibieron la denuncia de los marchistas por la violación a sus derechos de movilización y recordaron que el gobierno no realizó una consulta previa a las comunidades indígenas para conocer su criterio sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Tras escuchar las demandas, los representantes se comprometieron a compartirlas con la Organización de Naciones Unidas, hasta finales de ese septiembre.

Al concluir la reunión indígena, éstos redactaron una respuesta al gobierno, en la que proponían iniciar el diálogo en Quiquibey, población ubicada después de Yucumo, en el límite departamental entre Beni y La Paz. La carta fue lleva-



Los marchistas organizaron una fiesta nocturna para calmar sus ánimos. Los policías quisieron participar en el ágape, pero no tuvieron cabida en el festejo.

da a San Borja, por el secretario de la marcha, Miguel Charupá, quien la faxeó a La Paz.

Ya bajo el amparo de la oscuridad nocturna, los marchistas participaron de un momento de esparcimiento. Los guarayos tocaron sus instrumentos musicales y algunos marchistas se animaron a bailar. La celebración tranquilizó los ánimos de la gente. Los uniformados, emplazados muy cerca, querían integrarse a la fiesta, pero les aclararon que no estaban invitados. “Los indígenas que hacían guardia frente a la barricada policial fueron muy firmes y no los dejaron participar”, recordó Olga Flores, activista de derechos humanos.

Al día siguiente, la tensión se repitió en el campamento. Los policías no dejaron que los indígenas se acercaran al arroyo Chaparina. Los dirigentes trataron de paliar esta dificultad por todos los medios. Por ejemplo, una de las representantes del TIPNIS, Aidés Ortiz, llamó por teléfono a la gente que conocía en la vigilia de La Paz para clamar socorro.

Ese 21 de septiembre también estuvo rodeado de incertidumbre y malas noticias. Los rumores respecto al posible alejamiento de los guaraníes circulaban entre las carpas. Por si fuera poco, desde Pando llegó la noticia de que la policía reprimió una protesta de esse ejas y takanas en Pando.

Luego de que medio centenar de guaraníes dejaran La Embocada para retornar al Chaco, las dudas aumentaron. No hubo un pronunciamiento oficial de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), pero al mediodía de esa jornada el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, leyó en La Paz una carta de esa organización que solicitaba al gobierno una negociación en la localidad de Camiri.

La presidenta del Consejo de Capitanes guaraníes de Chuquisaca, Carmen Cruz, confirmó el encuentro. Pero el Presidente de la APG, Celso Padilla, negó desde San Borja la citada reunión. “El retiro es un relevo, yo me quedo, los compañeros que se marchan, van a reforzar los bloqueos en el Chaco”, aseguró.



Más tarde, el vicepresidente del Comité de Marcha, el guaraní Jorge Mendoza, reiteró que su pueblo no dejaba la movilización. Informó que un contingente de la subcentral del Parque Nacional Aguaragüe permanecía en Villa Yenny y explicó que su organización se dividió en tres grupos, uno que se quedaba en la marcha, otro que partió a Urundaiti para fortalecer las acciones guaraníes y otro hacia Yacuiba. “Hay que jugar a presionar de diferentes formas al gobierno”.

El reclamo indígena por agua, que fue la constante de esos días, se agudizó hasta el nivel de la desesperación, porque el calor superior a los 30 grados deshidratava rápidamente a los marchistas. Ante esa necesidad imperiosa, activistas de derechos humanos llevaron escasos 150 litros de agua hasta el campamento para paliar en algo la urgente necesidad.

La crítica necesidad obligó a los marchistas a poner en práctica sus habilidades de sobrevivencia. Buscaron una fuente

del líquido elemento en los alrededores del improvisado campamento y descubrieron un riachuelo que comenzaron a usar para el aseo personal.

Una indígena, de tanto insistir, logró pasar el cerco policial. Vigilada por los efectivos llegó al arroyo Chaparina, aunque su esfuerzo fue vano. Regresó con los envases vacíos porque el agua era escasa y estaba estancada. La pertinaz negativa policial enfadó al representante cruceño de la Defensoría del Pueblo, Hernán Cabrera: “Es un delito criminal impedir el acceso al agua”.

Mientras eso sucedía en la sabana beniana, lejos de allí, en Nueva York, el Presidente Evo Morales, antes de intervenir en la 66.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, descartó una reunión con los marchistas y los acusó de estar conformando un partido político. La respuesta llegó desde Villa Yenny a través del dirigente Fernando Vargas, quien pidió a Morales decir la verdad ante la ONU y reconocer que su “gobierno conspiraba para acabar con



“Hay poca agua y aunque hemos enseñado a potabilizarla, la gente dice que no le gusta su sabor y no quiere hervirla”, explicó el encargado médico del TIPNIS, Germán Linares.

los pueblos indígenas de la Amazonía de Bolivia”.

MÁS MOLESTIAS

Justamente, esa jornada un contingente de 120 policías reprimió a los indígenas que con un corte de vía en Pando mostraban su apoyo a la Octava Marcha. Tres bloqueadores y un policía heridos y varios indígenas contusos fue el saldo de esa acción, que sumó una razón más para que los marchistas repudiaran al gobierno.

Vargas reclamó: “No puede ser que en un lugar repriman y en otros no”, refiriéndose al bloqueo de Yucumo. “Si la marcha fuera en defensa de la coca seguro que la dejaban pasar con seguridad de la policía”. El guaraní Mendoza lamentó que el “gobierno haya usado balas. Eso no puede ser en un Estado democrático”.

El apoyo ciudadano a los indígenas creció con las noticias del cerco policial a la

marcha, y se tradujo en la organización de vigiliadas ciudadanas a cargo de activistas por los derechos humanos, organizaciones sociales como el CONAMAQ (en La Paz), simpatizantes del movimiento indígena y personas solidarias.

Desde el 19 de septiembre montaron un campamento en el atrio de la iglesia de San Francisco. La vigilia se abrió con una ceremonia de ofrenda a la Pachamama protagonizada por mallkus y mama tallas de CONAMAQ. Allí arrancó una campaña de recolección de firmas de adhesión a la marcha y se organizó un centro de acopio de víveres para los indígenas. Los productos que se recolectaban eran enviados en vehículos particulares de voluntarios o en alguno que otro vehículo de organizaciones sociales afines al movimiento indígena.

Similares acciones se vieron en la plaza 14 de Septiembre en Cochabamba y en la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz.

Según el mallku del CONAMAQ David Crispín, coordinador de la vigilia en La Paz, este movimiento ciudadano se proyectaba a medidas más fuertes: “Como el Gobierno dice que el bloqueo de Yucumo no es bloqueo sino vigilia, si fuera vigilia estarían en los costados del camino y no deteniendo a los vehículos, entonces nosotros hemos instruido a los 19 suyus a organizarse para que en cada comunidad se hagan vigiliadas bajo ese argumento y así el gobierno y la Policía no puedan intervenir”.

Otros simpatizantes y activistas prefirieron sumarse personalmente a la columna indígena. El miércoles 21 de septiembre partió un bus desde la plaza del Estadio Hernando Siles de La Paz rumbo a Yucumo. En el coche se embarcaron alrededor de 50 personas entre las que se contaban ex parlamentarios y autoridades del MAS, como el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, activistas de derechos humanos y otros.



Los simpatizantes reforzaron la marcha y el gobierno el cerco policial

El arribo de activistas de Cochabamba y La Paz levantó la moral de los indígenas. Éstos veían con temor el aumento del número de uniformados en las inmediaciones de Yucumo y el campamento.



El jueves 22 de septiembre los indígenas recibieron el día con una nueva preocupación. Un refuerzo policial había llegado al lugar y los uniformados ya sumaban más de 400. Sin embargo, una buena noticia equilibró la situación. El grupo de ex parlamentarios y autoridades del MAS, activistas de derechos humanos y ciudadanos, que partió un día antes de La Paz, ya estaba en Yucumo.

Esos simpatizantes de la marcha fueron recibidos con resistencia por los colonos. Aproximadamente a las diez de la mañana, la representante de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, que era parte de ese conjunto, comenzó a negociar con los colonos y el subcalde de Yucumo, Rosendo Chura (MAS) para poder cruzar el bloqueado puente San Lorenzo. "Ellos me conocían y no



me trataron mal, aunque no querían dejarnos pasar", recordó la activista. Paralelamente, el ex senador del MAS, Lino Villca, que también había llegado a Yucumo, informó que los colonizadores de Sapecho (norte de La Paz) también cortaban la carretera.

Luego de tres horas y media de conversaciones y después de que los bloqueadores tildaran a estas personas de resentidas, busca-pegas y traidoras, parte del grupo superó el cerco. Entre ellos estaban: Gustavo Guzmán (ex embajador de Bolivia en Estados Unidos), Villca, Carvajal, Julieta



Ojeda, de la organización Mujeres Creando, y Omar Fernández, ex senador del MAS.

A primera hora de la tarde, Villca llegó a la marcha y no pudo reprimir las lágrimas cuando comprobó el doble bloqueo que soportaban los indígenas, impulsado por policías y colonizadores.

Los principales dirigentes de la marcha, Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB y Fernando Vargas, presidente del TIPNIS recibieron a los recién llegados.

En ese momento, Chávez conversó con los periodistas y aprovechó para negar que los dirigentes de la marcha recibieran financiamiento de Estados Unidos, como afirmaba el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

En esa fecha, como ocurría en los últimos días, los indígenas no lograron acercarse al agua. La carencia afectaba a los indígenas y sobre todo

a los niños. Al final de la tarde, Adolfo Chávez pidió nuevamente a la Policía que dejara libre la vía para que sus compañeros tengan acceso al arroyo Chaparina y facilitara el paso de los vehículos retenidos en Yucumo que transportaban alimentos para la columna. Como paliativo a esta situación el Comité Cívico Femenino y de las Damas Borjanas organizaban diariamente campañas de recolección de víveres y agua en la plaza principal de San Borja. Además, algunos periodistas llevaban al campamento agua donada por la ciudadanía en botellas reutilizables.

Los colonizadores de Yucumo se mostraban agresivos con los periodistas destinados a cubrir la movilización indígena. Los pobladores agredieron a algunos periodistas e intentaron que no accedieran a la información que se generaba en el diálogo entre las autoridades municipales y Amparo Carvajal de Derechos Humanos.

Al final de la tarde, como sucedía con frecuencia desde hacía varias jornadas, se organizó una función

de títeres. Cuando las luces del día comenzaron a descender, los titiriteros responsables de dar vida a las aventuras de los muñecos Isidro y Obama comenzaron una función para los chicos.

Los niños del campamento se reunieron en torno a Isidro, un muñeco artesanal vestido con un poncho y lluchu multicolores, y bailaron al ritmo de las tres tarkas de los artistas. Isidro, manipulado por uno de los jóvenes, llamaba a los niños a seguirlo para la función de esa tarde hasta el teatrillo, improvisado con una tela azul e instalado a 20 metros de la barrera policial, cerca de la guardia indígena.

Al concluir la función los niños volvieron al campamento, donde algunos activistas de derechos humanos que habían llegado en esa jornada los congregaron en rondas infantiles y les enseñaron a cantar consignas políticas en contra del gobierno y a favor de la movilización indígena. Al respecto, el Código Niño Niña Adolescente tipifica esas acciones como un

El Chino se convirtió en marchista después de la represión



maltrato hacia los niños. El artículo 109 de ese cuerpo legal dice que un niño es maltratado cuando se lo utiliza “como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causas políticas o posición ideológica de sus padres o familiares”.

Cuando las sombras cubrían casi por completo el improvisado campamento, llegaron al lugar Alejandro Almaraz y Óscar Olivera, quienes habían arribado en la mañana a Yucumo. Salieron de la espesura del bosque por un costado del campamento, guiados por un grupo de indígenas enviados desde la marcha y que les dieron encuentro en las cercanías de Yucumo y los llevaron al campamento por sendas y caminos vecinales, para burlar el bloqueo colonizador.

Almaraz cuestionó el bloqueo de Yucumo y criticó la actitud de la fuerza policial, que ese día superó los más de 400 efectivos, albergados en el cuartel de Umopar de la población y en un aserradero cercano al asentamiento urbano.

Los activistas llegan a la marcha, después de superar el bloqueo de los colonizadores de Yucumo y de los policías que estaban apostados en la ruta con órdenes de no dejar pasar a los indígenas, supuestamente, por su propia seguridad.

Erwin Otta Mercado, más conocido como El Chino por los indígenas que participaron en la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, se aproximó a la movilización sólo por curiosidad, cuando los indígenas acampaban en Villa Yenny desde el 20 de septiembre. Tras conocerlos personalmente se identificó con ellos por la injusticia que padecían en la marcha. Otta, de ascendencia japonesa, es oriundo de Santa Rosa de Yacuma pero se considera ciudadano borjano. Tiene una propiedad aledaña a la carretera que va a Yucumo, cerca a Villa Yenny.

Convencido de que los indígenas no hacían daño a nadie, comenzó a ayudarlos personalmente en todo cuanto estaba a su alcance. Por eso no dudó en sacrificar más de una vaquilla de su ganado y contribuir de esa forma a la alimentación de los marchistas atrapados en ese lugar. “Voy a separar a las vacas para que mañana pueda ordeñarlas y dar leche a los niños”, nos contó la tarde del 22 de septiembre, mientras conversaba con algunos miembros del equipo médico en Villa Yenny.

Su empeño por coadyuvar a la marcha lo llevó a cumplir tareas complicadas como transportar a los simpatizantes de la marcha que partieron de La Paz y fueron bloqueados en Yucumo en su intento por sumarse a la movilización. La tarde de ese 22 de septiembre partió del campamento y se internó por sendas y caminos vecinales que llevaban hasta las cercanías de Yucumo. Contactó a los simpatizantes de la marcha y los transportó de vuelta hasta el campamento indígena, burlando el cierre de la vía de los colonizadores y el cerco policial. Uno de los rescatados fue el ex viceministro Alejandro Almaraz.

La represión policial del domingo 25 de septiembre, acrecentó su identificación con la movilización indígena, hasta el punto de unirse a los marchistas y llegar a La Paz. Aquella infortunada noche Otta recorrió varias veces la carretera y los caminos vecinales rescatando a niños que habían quedado solos y a indígenas que escaparon de la arremetida policial. Refugió a 65 personas.

En la madrugada del 26 de septiembre dejó el anonimato y apareció frente a las cámaras de televisión haciendo una emotiva declaración junto a los niños que había rescatado. Con la voz entrecortada por las lágrimas hizo una dramática pregunta: “¿Quién es el monstruo que ordenó la represión?”. En ese momento dejó su vida incógnita y pasó a la vida pública con todos los riesgos que aquello implicaba para él y su familia. Pudo más su conciencia humana, escribirla semanas después Almaraz.

El Canciller en la punta de la marcha y muy atrás la tamborita sonaba

Un grupo de mujeres tomó las riendas de la situación, sujetó por los brazos al Canciller, lo llevó al centro de la carretera hacia Yucumo, y comenzó a marchar con la autoridad.



La mañana del 24 de septiembre amaneció nublada en el campamento indígena. Los marchistas se aprestaban a recibir al canciller David Choquehuanca con quien habían convenido reiniciar las conversaciones a las nueve de la mañana. El Ministro arribó desde Yucumo, donde había sostenido una larga conversación con los colonos que bloqueaban el camino a San Borja.

Reinaba un clima de tensión debido a que el día anterior, Choquehuanca se había presentado como facilitador de un pretendido diálogo entre marchistas y bloqueadores, algo que los indígenas rechazaron molestos

El representante de la Defensoría del Pueblo en el Beni, Luis Revollo, estaba presente en el lugar y recuerda que poco a poco la negociación se tornó



El mal hábito de usurpar el emblema de la Cruz Roja

Cuando el 23 de septiembre, el Canciller David Choquehuanca llegó a San Borja, habían pasado algunos minutos después de las cinco de la tarde. La autoridad arribó a la pista de esa ciudad en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB – 031) en compañía del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, y con el entonces viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.

La comitiva arribaba a esa ciudad con varias horas de retraso. Los ministros debían llegar a San Borja antes del mediodía, pero una torrencial lluvia dejó inoperable la pista de aterrizaje borjana.

Con el argumento del retraso, la delegación dejó la terminal aérea y se dirigió de inmediato al campa-

mento indígena. Los oficiales encargados de custodiar a Choquehuanca trasladaron a la autoridad en una ambulancia del Gobierno Municipal identificada con el símbolo de la Cruz Roja.

El representante en San Borja de esa institución de voluntariado, José Michel protestó cuando se enteró de que un vehículo identificado con el emblema de su institución había sido utilizado como si fuera un automóvil de transporte público.

Según Michel, a mediados de 2011, el gobierno donó a San Borja varias ambulancias adornadas con el logo rojo. Añadió que su entidad pidió infructuosamente a las autoridades que remuevan el emblema de los vehículos y aseguró que no tienen ninguna relación con la Cruz Roja.

tan tensa que era claro que no arrojaría un buen resultado.

Entonces, los dirigentes decidieron finalizar las conversaciones y despachar al Ministro. Sin embargo, antes de que eso sucediera, un grupo de mujeres tomó las riendas de la situación: sujetaron al Canciller, lo llevaron al centro de la carretera hacia Yucumo y comenzaron a caminar. Por detrás, se aglomeró un grupo de indígenas y siguió los pasos de sus compañeras. Lo mismo hicieron los dirigentes, así que en pocos minutos la mayoría de los marchistas caminaba detrás del Canciller, muy bien sujetado por los fuertes brazos de las indígenas.

Marina Wasania, secretaria de Género y Generacional de la CIDOB explicó los motivos de su acción: "Para nosotras fue una cosa inesperada porque realmente nos vino del corazón ver tanto sufrimiento, tantos días en la carretera sin solución".

Eran aproximadamente las diez y media cuando se desarrollaron los sucesos. Vestido informalmente con una polera ploma, Choquehuanca caminaba nervioso y con el rostro demudado. El viceministro César Navarro corría voluntariamente cerca de él, mientras que el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez —que también había llegado con Choquehuanca—, había huido hacia las filas policiales.



Edwin Foronda, el comandante del destacamento policial acantonado en el área, acudió donde el Canciller y varias veces trató de sustraerlo de la comitiva indígena hasta que en un momento logró detener al grupo.

Marina Wasania, presente en ese momento, recuerda que el comandante, apelando a una argucia, les pedía a los indígenas que suelten al Canciller para que él en persona ordene a

los policías que abran el paso. "Entonces, otra compañera agarró al comandante y le dijo: 'Usted no se va, porque va a dar la orden desde aquí'".

Tras unos minutos de zozobra, se reanudó la marcha. Choquehuanca iba al centro y en primera fila, abriendo senda. La guardia indígena se apostó adelante y a los costados de la columna como medida de seguridad ante un eventual choque. ▶

La presencia de la ambulancia generó desconfianza en los indígenas porque dos semanas antes un vehículo con las mismas características había intentado ingresar al campamento en La Embocada con un grupo de policías en su interior.

El Canciller ingresó al campamento y propuso a los indígenas mediar entre ellos y los colonizadores. Éstos rechazaron el ofrecimiento y le dijeron que no tenían nada que conversar con los bloqueadores.

Al término de la reunión, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, explicó que presentarían una propuesta de "ley corta" que modifique el trazo del tramo II de la polémica carretera.

Se dieron una pausa en las pláticas hasta las nueve de la mañana del día siguiente y Choquehuanca marchó con rumbo a Yucumo. Allí hizo contacto con los interculturales que bloqueaban la carretera y sostuvo con ellos una reunión. Según el representante defensorial del Beni, Luis Revollo, la cita duró desde las siete y media de la noche hasta las dos de la mañana.





La odisea de Choquehuanca duró tres horas. La Policía custodió cinco kilómetros y medio a los marchistas que llevaban del brazo al Canciller. Al concluir su experiencia, el Ministro de Relaciones Exteriores fue entrevistado por un grupo de expectantes periodistas.

- ◀ El cerco policial estaba a cien metros de distancia aproximadamente (esa madrugada, había retrocedido, dejando libre el paso hacia el arroyo Chaparina). La inminencia de una reacción violenta de parte de los agentes estaba en la mente de todos los marchistas mientras más se acercaban.

Al final, cuando se vieron cara a cara, los uniformados cerraron el paso y, mientras trataban de convencer a los marchistas de que liberen al Ministro, comenzaron a forcejear con la guardia indígena, equipada con de arcos, flechas y lanzas. Un policía cayó a la cuneta de la carretera. Fue uno de los momentos más críticos.

Pese a todo, los indígenas se abrieron paso y continuaron su recorrido por aproximadamente dos kilómetros más. La Policía no se daba por

vencida así que cerca de cincuenta oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), provistos de chalecos antibalas, cascos y escudos antidisturbios, caminaba delante del grupo. Los indígenas, temerosos de que los agentes los rodearan para reprimirlos, pidieron a Choquehuanca que llame por teléfono al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para que éste prohíba cualquier acción violenta. El Canciller se excusó alegando que no tenía celular, pero ese momento, el principal dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas, le prestó su móvil y dejó a la autoridad sin argumentos.

Era la una menos cuarto y la conversación duró alrededor de ocho minutos. Choquehuanca le pidió a Llorenti que los agentes de la UTOP dejen de rodear al grupo. Luego, le informó sobre las conversaciones que había sostenido con los marchistas y los colonizadores. También le comentó que los ánimos estaban caldeados en el lugar y que al principio de la marcha forzada hubo "amagos" de enfrentamiento entre indígenas y policías:

"Si ellos [los policías] se hubiesen resistido, posiblemente habríamos llegado a hechos incalculables (...). Por

eso les estoy comunicando para que ustedes [en La Paz] puedan evaluar y seguramente comunicarse con el comandante de la Policía".

Mientras Choquehuanca era zarandeado, Llorenti ofreció una conferencia de prensa en La Paz en la que denunció que el Canciller había sido capturado por los marchistas.

El avance del grupo era por momentos detenido por la Policía que pedía la liberación de Choquehuanca. Si en la punta de la comitiva la tensión estaba a flor de piel, más atrás, ajenos a las discusiones, los marchistas hacían el recorrido entusiasmados. "Por fin caminamos, después de tantos días", dijo un joven guaraní. En medio del tumulto, la tamborita volvió a sonar.

Así, a la una y cuatro de la tarde, tras 5,5 kilómetros de camino y a medio kilómetro del puente San Lorenzo de Chaparina, las marchistas soltaron al Canciller. Éste, acompañado del coronel Foronda, se dirigió con calma hacia las filas policiales, donde brindó su versión de los hechos a los periodistas que ansiosos esperaban en el lugar.



“Me he sentido mal. Nadie se siente bien en esa situación. He sido obligado, he sido forzado a marchar” respondió al ser consultado si había sido tomado rehén. La indígena Wasina está convencida de que no hicieron “nada malo” al Canciller. “Las mujeres lo hemos protegido”.

El Ministro añadió a la prensa: “Ustedes me ven tranquilo. Pero también nadie se siente bien. Se ha presentado una situación hostil, una situación difícil. Yo he venido simplemente a facilitar el diálogo, para evitar cualquier situación de enfrentamiento”.

Luego de su declaración, abatido, se dirigió a una camioneta de la Policía y, curiosamente, trepó a la carrocería y aguardó una hora antes de partir hacia Yucumo.

Entre tanto, los colonos subían el tono de sus consignas contra los indígenas y lanzaban petardos hacia la marcha, mientras ésta se acercaba a ellos.

En ese momento, Javier Reas, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores

Campeños de Bolivia (CSTUCB) aseguró enardecido que no dejarían pasar a los indígenas.

Pasadas las tres de la tarde, los ánimos se calmaron, Choquehuanca regresó a La Paz, los colonizadores continuaron con el bloqueo y los indígenas instalaron su campamento en San Lorenzo de Chaparina, una pequeña propiedad ubicada al costado sur de la

carretera. Los vehículos de apoyo de la marcha llevaron el almuerzo, que había sido preparado en Villa Yenny.

Al parecer todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, en el ambiente se había instalado una tensión mal disimulada. La gente temía que luego de su escapada con el Canciller, la amenaza de la intervención policial se hiciera realidad.





“Nos amenazaron con colonos, pero la marcha era pacífica”



ERNESTO NOE TAMO
LÍDER MOJEÑO DE LA MARCHA DE 1990

Ernesto Noe Tamo, uno de los líderes de la primera marcha indígena de tierras bajas, que en 1990 reivindicara el derecho de estos pueblos a poseer sus territorios y reclamara al Estado su reconocimiento como ciudadanos bolivianos, ha caminado en la columna de indígenas que por octava vez se dirigió a la sede de gobierno para reclamar a las autoridades nacionales respeto a sus derechos.

Noe pertenece al pueblo mojeño y, además de conformar el comité organizador de la histórica marcha de 1990, también fue uno de los fundadores de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

En estos 22 años ha realizado un diverso trabajo a favor de sus congéneres; en 2010 le tocó comandar la séptima marcha indígena que llegó hasta la población cruceña de Ascensión de Guarayos y, actualmente, forma parte del tribunal disciplinario de la CPIB.

“A pesar de los años, seguimos luchando, quizás ya no caminamos tan rápido, pero conservamos la fortaleza”, reflexionó Noe, cuando explicó que a pesar de sus 71 años, la edad no es un óbice para luchar por sus derechos.

El sábado 27 de agosto, en la comunidad de El Totaizal, a 53 kilómetros de San Borja, Noe conversó con la Fundación TIERRA, y destacó la labor

de la dirigencia indígena, el esfuerzo de los marchistas y recordó al gobierno que la protesta indígena es pacífica y sólo espera respeto de parte del gobierno “al que apoyamos en las elecciones, aunque ahora nos ha traicionado”, lamentó.

¿Cómo evalúa la Octava Marcha Indígena, considerando su experiencia como uno de los organizadores de la movilización de 1990?

Organizamos la marcha indígena de 1990 y también estuvimos en la séptima marcha indígena convocada por la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) el año pasado. En 1990 tuvimos un éxito rotundo, claro que no todo fue una taza de leche, siempre tenemos nuestros altibajos nuestras amenazas, cosas buenas y cosas malas.

En 1990 los militares nos querían reprimir, pero mucha gente nos apoyaba y recuerdo que don Jaime Paz Zamora era un hombre crudo, porque todos nuestros pedidos, memoriales de solicitud no los consideraba. Las empresas forestales, los ganaderos nos humillaban.

Optamos por una marcha por el Territorio y la Dignidad, porque podríamos recuperar nuestros territorios. Como cabeza de la CPIB, le pedimos eso al gobierno, representábamos a tres grandes sectores (mojeños, chimanes y sirionós) que estaban en poder de grandes señores con dinero y poder político.

Nos amenazaron en la marcha diciéndonos que nos iban a matar, que pedíamos una cosa insólita, que era contra la Constitución Política del Estado; nosotros no hicimos caso y decidimos nomás marchar.

En esta marcha, San Ignacio se opuso a la movilización, pero en 1990 ese pueblo los recibió con más entusiasmo, ¿cómo explica esta diferencia?

En San Ignacio todo el mundo estuvo con nosotros y se plegaron a la marcha, en cambio ahora la reacción fue diferente. En 1990, cuando lle-

gamos a San Borja nos estaban esperando 200 hermanos t'simanes listos para marchar, pero los empresarios madereros, había 18 empresas, les dijeron: "Ustedes no van a marchar porque esos señores de CPIB vienen con armas de fuego, con palos, los van a machetear váyanse a sus comunidades", les dieron camiones y buses. Sólo un t'simáne, Germán Caita, marchó con nosotros. De todas maneras, cuando llegamos a San Borja la gente nos recibió con mucho cariño, ahí hicimos una misa de campaña para encomendarnos al Todopoderoso, no pasó nada, ¡mentira que nos iban a sacar del pueblo!

¿Cómo fue la travesía de 1990 si la compara con la de este año?

Después de San Borja llegamos a La Paz pero no teníamos lo suficiente, no teníamos el apoyo logístico como se ve ahora, más de 15 camionetas están apoyando aquí; en aquel entonces no había ni una camioneta, nuestras maletas las llevábamos al hombro, algunos camiones nos prestaban su apoyo y ahí aprovechábamos. Pero en esa marcha del 90 otros sectores que no eran indígenas nos apoyaron y también la fuerza internacional que le dijo al gobierno "le vas a dar territorio a los indígenas, ellos piden territorios indígenas no piden una república independiente", como nos decía el ex presidente Jaime Paz Zamora, que nos decía que pedíamos "republiquetas". Pero al final de cuentas la marcha tuvo su éxito porque no sólo tuvimos territorios nosotros, sino también los hermanos tarijeños, los cruceños, pandinos, paceños, cochabambinos.

Después de esa marcha el Estado los reconoció como ciudadanos bolivianos. Pero han pasado más de 20 años y una vez más tienen que salir a la carretera para que sus demandas sean escuchadas...

Es un contraste muy grande, porque después de más de 20 años creo que el gobierno no nos ha entendido, el gobierno está perifoneando por todo Bolivia y el mundo que somos antisociales, que somos enemigos del progreso, que no queremos carretera y está diciendo cosas que no son ciertas; miente el gobierno y todos sus ministros cuando dicen que nos damos el lujo de oponernos a la construcción de una carretera. Eso es falso, nosotros queremos una carretera, pero le hemos dicho al gobierno y a sus ministros que no cruce por el TIPNIS porque se destruirá el hábitat de nuestros hermanos indígenas. Ya sabemos lo que nos va a venir, se va a entrar la colonización, y ellos no siembran yuca o plátano, sino la coca. Nuestros hermanos tienen su patrimonio ahí, aprovechan de manera racional sus recursos; son los colonos quienes se llevan la madera, no nos nosotros como nos acusa el gobierno.

El gobierno está empecinado en construir la carretera "sí o sí", según él. Pero, según nosotros, si el gobierno comete estos errores tiene que saber que está atentando contra la vida de nuestras comunidades, porque se van a salir de las comunidades y nuestras tierras se van a llenar de colonos.

¿Esta marcha también lleva una plataforma de demandas de 16 puntos, no es muy amplia y, por ello, compleja y difícil de resolver?

De ninguna manera (al inicio de la marcha) ya había 13 puntos para negociar, pero el gobierno no le presta importancia a la marcha indígena, no es defensor de los indígenas.

¿Desde su experiencia, cómo ve el proceso de diálogo, el trabajo de la directiva de la Cidob y de las organizaciones regionales que representan a los indígenas?

Hay un equipo técnico que ha trabajado con los presidentes de las regionales, que han hecho una causa común para discutir punto por punto la plataforma que hemos planteado al gobierno. Se ha dicho de que el gobierno debe acudir a la solicitud del llamado que hacen los pueblos indígenas para reunirse donde sea; no quieren en San Ignacio, en Puerto San Borja tampoco, como último se le pidió que venga y que podamos dialogar aquí en la Estación Biológica del Beni (al frente de la comunidad Totaizal), para solucionar los planteamientos de los pueblos indígenas ya no sólo del TIPNIS. Pero vemos que nuestro gobierno nos está dando la espalda, porque se estrella contra nosotros, cuando él dice ser indígena, cuando participa en otros países, a él lo condecoran como defensor de la tierra, pero ¿por qué en Bolivia quiere destruir el parque nacional?, él se está contradiciendo.

Otra cosa que nos preocupa es que el gobierno dice que va a hacer una ley que nos va a afectar porque los territorios ya no sean nuestros territorios y esta marcha no sólo trata de defender el TIPNIS, sino a todos los territorios del país.

¿Cómo evalúa el trabajo de los líderes de la Octava Marcha, tiene la fortaleza necesaria para enfrentar la presión que usted denuncia?

Bueno cada uno está haciendo lo que puede. De forma conjunta se hace una evaluación con el directorio de la CIDOB y lo mismo con los directorios de las regionales internamente para que no haya problemas y les decimos donde fallan, pero también hay un equipo grande, que ha corregido la plataforma para que el gobierno solucione nuestras cosas o si no llegamos a La Paz.

Nos amenazan con colonos pero la marcha es pacífica, no vamos a buscar pelea a Yucumo o Caranavi (en La Paz), vamos a dialogar con el gobierno y si no les da la gana vamos a llegar hasta La Paz, como lo hicimos en el 90. Nos amenazaron, pero llegamos porque (en 1990) hicimos una marcha pacífica y ésta también es una marcha pacífica, es una marcha nacional que le dice al gobierno, "somos hijos de esta patria, somos el Estado de Bolivia tiene que atender lo que el pueblo le pide y si no le da solución demostraría que no le da la gana de solucionar". Eso es incapacidad, pero todavía tenemos la esperanza de que el gobierno atienda nuestras demandas.



Antonio Soto, el cronista de la marcha



ANTONIO SOTO
INDÍGENA CANICHANA

El veterano marchista Antonio Soto conoce de esfuerzos físicos y de convicciones. Este hombre, hijo del pueblo indígena canichana, participó en todas las marchas indígenas desde 1990. Por ello, el año pasado recorrió los 602 kilómetros por la carretera que une Trinidad con La Paz sin importarle el peso de sus 68 años. “Estoy perfectamente bien, pero mi edad no me permite mucho esfuerzo, así que ésta será mi última marcha”, comentó en agosto, cuando la Octava Marcha Indígena descansaba en la comunidad beniana de Totaizal.

Y quizás, la ausencia de este marchista será una de las más visibles, pues está considerado como el cronista y poeta de las movilizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas. Desde 1990, Soto escribe diarios de las marchas; todas las jornadas registra en un cuaderno o una agenda las vicisitudes de las movilizaciones y, además, compone canciones y poemas de agradecimiento a quienes los reciben con afecto, y de reproche para quienes los critican o insultan.

En 2011, esa tarea se repitió. El indígena registró los detalles de la marcha en una agenda de cuero hasta el 25 de septiembre, fecha en la que la marcha fue intervenida por la Policía y, en el alboroto, perdió sus preciados papeles. “Desapareció mi diario. El día de la interven-

ción se quedaron mis cosas porque no me dieron tiempo a sacar nada y ya no apareció la agenda”, dijo tristísimo, cuando ya había llegado a la localidad de Palos Blancos, en el territorio paceño.

No obstante, la voluntad pudo más y encontró la forma de rehacer sus recuerdos. “Ya tengo un nuevo cuaderno y voy a escribir todo lo que nos pasó”.

Pero el indígena no es sólo poeta, también es un firme convencido de que debe defender sus derechos con los métodos que él conoce. “[Esta movilización] no es de pelea, no es de insultos, no es una marcha en la que venimos a quitar nada, sino una manifestación que busca el diálogo con el señor Presidente”.

Su certidumbre se basa en la experiencia de sus anteriores marchas. “En la marcha de 1996 conquistamos la Ley INRA en Samaipata el 18 de octubre. Esa marcha fue larga. Partimos un 27 de agosto de Santa Cruz y llegamos a Samaipata y ahí nos quedamos durante un mes”. A pesar de su éxito, esa movilización durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada costó la vida a cuatro indígenas. “Una señora muere de parto y muere su niño. Después muere un caballero de Riberalta, tenía malaria y después muere un niño más. Eso causó gran llanto y dolor en la marcha”.

Ese camino de éxito y esfuerzo se repite en la movilización de 2010. “Salimos de Trinidad con destino a Santa Cruz. Solamente llegamos hasta San Ramón y ahí conseguimos la Ley Marco [de autonomías]”. Marcharon durante junio y julio. Los “sures, lluvia y viento, nos azotaban, nos hacían temblar en la carretera, pero así demostramos al mundo de que uno puede vencer”.

Sus vivencias le sirven a Soto para afirmar que la lucha es por el futuro de los niños indígenas. “Que no digan después nuestros hijos, nuestros nietos, que nunca hicimos nada por ellos. Estamos en la lucha hasta el final para dejarles por lo menos tierras con títulos para

que ellos puedan trabajar, puedan permanecer allí y no ser expulsados de las tierras donde han nacido”.

Antonio Soto descubrió su don creativo cuando ya era adulto y tenía una familia propia. “Antes no escribía, era un simple obrero. Pero cuando me casé y tuve mis hijos, sentí la necesidad de cambiar”.

A continuación publicamos algunos versos que Soto dedicó a la marcha en defensa del TIPNIS:

*“Vengan todos mis hermanos indígenas
Vengan todos a marchar
A defender nuestro parque el TIPNIS
Nos lo quieren dividir
Eso no lo permitiremos jamás
Diez mil árboles serán cortados
La ecología y el medio ambiente serán destruidos
Nuestros animales serán exterminados
No nos oponemos que se haga esta carretera
No será por donde diga el gobierno
Será en consenso por donde decidamos
Los indígenas no nos oponemos
Que lo sepa el mundo entero
Nos despellejan a los indígenas
Nos ultrajan y pisotean
En mi país llamado Bolivia
Vivan vivan los indígenas
Marchamos con la frente altiva
Una marcha muy peligrosa
Así llegaremos hasta La Paz
Vivan vivan las mujeres indígenas
Vivan vivan las mujeres indígenas de Bolivia
Son el puntal en esta marcha
Marchamos disciplinados
Gloria gloria a Juan Maraza
Gloria gloria a Pedro Ignacio Muiba
Grandes líderes de los Moxos
Santo Noco y Lorenza Congo
Nicolás Sanosa de Cúbeme
Viva viva la libertad”.*

